



**TRABAJO FIN DE GRADO**  
**GRADO RELACIONES LABORALES**  
**CURSO ACADÉMICO 2017-2018**

**LA CARTA SOCIAL EUROPEA Y ESPAÑA**

**THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER AND SPAIN**

Autora: Ana Barrero Calderón.

Directora: Yaelle Cacho Sanchez.

## RESUMEN:

Nuestro trabajo se basa en el estudio del sistema establecido por la Carta Social Europea (CSE), que a pesar de su importancia en el ámbito de la protección de los derechos económicos y sociales en Europa, esto no sólo sigue siendo muy desconocido, sino que además España todavía no se ha incorporado de manera plena al mismo. Además nos hemos encargado de determinar las características generales del sistema CSE y de hacer un examen comparativo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) para su mejor entendimiento se ha examinado la manera en que España se ha incorporado a este sistema y las consecuencias prácticas que esa incorporación ha supuesto, tanto por los avances que se han producido en nuestra legislación por la pertenencia de España a la CSE, como en términos de no conformidad. Sobre la base de este examen no hemos apreciado obstáculos importantes a la incorporación de España al Protocolo Adicional de 1995 sobre las reclamaciones colectivas ni a la CSE revisada, más allá de los meramente políticos, pero si consideramos su necesidad y conveniencia, y ello sin perjuicio de que hemos observado, que tanto el Protocolo de 1995 como la CSE revisada parecen poseer una cierta presencia en nuestro ordenamiento, aunque sea de manera indirecta.

## ABSTRACT:

Our work is based on the study of the system established by the European Social Charter (CSE), which despite its importance in the field of the protection of economic and social rights in Europe, this not only remains very unknown, but also Spain has not yet been fully incorporated into it. We have also been in charge of determining the general characteristics of the CSE system and of making a comparative examination with the European Convention of Human Rights (ECHR). To better understand it, we have examined the way in which Spain has incorporated this system and the practical consequences that this incorporation has meant, both because of the advances that have taken place in our legislation due to Spain's membership in the CSE, and in terms of non-conformity. On the basis of this review, we have not seen any significant obstacles to the incorporation of Spain to the Additional Protocol of 1995 on collective claims or to the revised CSE, beyond the merely political ones, but if we consider their necessity and convenience, and without prejudice We have observed that both the 1995 Protocol and the revised CSE seem to have a certain presence in our order, albeit indirectly.

# ÍNDICE

## ABREVIATURAS

.....4.

1. INTRODUCCIÓN.....5-6.

2. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.....7-14.

3. LA CARTA SOCIAL EUROPEA.....15.

3.1. Características de la Carta Social Europea.....15-19.

3.2. Los derechos reconocidos en la Carta Social Europea.....19-23.

3.3. El mecanismo de control de la Carta Social Europea.....23-31.

4. LA CARTA SOCIAL EUROPEA: EL CASO DE ESPAÑA.....32.

4.1. El grado de aceptación por España del sistema de la Carta Social Europea.....32-37.

4.2. El grado de cumplimiento por España de los compromisos asumidos en el marco del sistema de la Carta Social Europea: algunos ejemplos .....38-47.

5. CONCLUSIONES.....48-51.

BIBLIOGRAFÍA.....52-58.

## **ABREVIATURAS**

CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
CEDS	Comité Europeo de Derechos Sociales
CSE	Carta Social Europea
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
SEISS	Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales

## 1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Europa es una organización internacional de fines generales que tiene como prioridades principales la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, siendo esta última su faceta más conocida. En este ámbito ha desarrollado una intensa actividad desde su constitución tras la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente a través de la adopción de una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que muchos de estos tratados otorgan una protección especial a determinadas personas o proceden a un tratamiento individualizado de estos derechos<sup>1</sup>, el Consejo de Europa cuenta con dos tratados que contemplan al individuo de forma general y a los derechos humanos en su globalidad, configurando el régimen general de protección de los derechos humanos en Europa. Estos dos tratados son el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Siguiendo un modelo que ya se ha consolidado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, regulan por separado los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, al tiempo que establecen sendos mecanismos de control internacional<sup>2</sup>. Aunque el objeto de ambos mecanismos es valorar la adecuación del comportamiento del Estado a las obligaciones que impone cada uno de estos tratados, no responden, sin embargo, como veremos, a las mismas características.

Nuestro trabajo se va a centrar en el estudio del sistema establecido por la Carta Social Europea, que, a pesar de su importancia en el ámbito de la protección de los derechos económicos y sociales en Europa, sigue siendo muy desconocido. Es también un tratado muy interesante para una graduanda en el Grado de Relaciones Laborales. Por eso, hemos considerado oportuno completar nuestra formación con un trabajo que nos permitiera un mejor conocimiento del mismo. Al comenzar a adentrarnos en su estudio,

---

<sup>1</sup> A modo ejemplificativo, se pueden citar, por ejemplo, el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (1987) o el Convenio-Marco para la protección de las minorías nacionales (1995).

<sup>2</sup> *Vid.* características generales de los sistemas internacionales de derechos humanos en ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (I)”, en DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18ª ed., Tecnos, 2013, pp. 663 y ss.

nos llamó poderosamente la atención el dato de que España no se había incorporado de manera plena al sistema que establece la Carta Social Europea, por lo que uno de los objetivos que ha guiado nuestra investigación ha sido precisamente entender el motivo o conocer los obstáculos que impedirían a España ser parte en la Carta Social Europea revisada en pleno siglo XXI, cuando nuestra Constitución de 1978 contempla que “España se constituye en un Estado social” (artículo 1). Por otro lado, vinculada a esta cuestión, también nos parecía interesante examinar el modo en que España había adecuado su comportamiento al cumplimiento de las obligaciones que le impone la Carta.

En consecuencia, nuestro trabajo parte de un estudio general del sistema instaurado por la Carta Social Europea en sí mismo considerado. Este estudio va precedido, sin embargo, del análisis global del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el entendimiento de que un examen comparativo entre ambos instrumentos jurídicos contribuiría a una mejor comprensión de la Carta. Una vez determinadas sus características generales, examinamos el modo en que España se ha incorporado a su sistema y las consecuencias prácticas que esa incorporación ha tenido, fundamentalmente a través de un análisis somero de los informes periódicos presentados por nuestro país, centrándonos en los últimos cuatro informes con el fin de completar los cuatro grupos temáticos en que, como veremos, se ha dividido la Carta a efectos del control de su cumplimiento. En este punto nuestro análisis será, por tanto, más documental, pero también no muy exhaustivo, en la medida en que lo que se pretende en el mismo es simplemente proporcionar algunos ejemplos de avances que se han producido en nuestra legislación por la pertenencia de España a la CSE, pero también de situaciones de no conformidad que exigirían un desarrollo legislativo adecuado.

## 2. EL CONVENIO EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS

El *Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales* (en adelante, el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el CEDH) fue adoptado el 4 de Noviembre de 1950 en Roma, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1953. Nace como un instrumento internacional de protección de los Derechos Civiles y Políticos. No obstante, además del listado de derechos, también establece un mecanismo de garantía, que actualmente responde a un modelo judicial: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, el Tribunal o el TEDH). Además, el art 1 del Convenio dispone que los Estados reconocen a todas las personas dependientes de su jurisdicción (y no únicamente a sus nacionales) los derechos y libertades definidos en él.<sup>3</sup>

La ratificación del CEDH es condición indispensable para ser miembro del Consejo de Europa. España lo ratificó el 26 de septiembre de 1979, entrando en vigor para nuestro país el 4 de octubre de ese mismo año<sup>4</sup>. El Convenio ha sido completado por una serie de Protocolos. De ellos, los números 1, 4, 6, 7, 12 y 13 son protocolos de carácter normativo, en el sentido de que amplían el catálogo de derechos reconocidos en 1950; los protocolos números 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 14 bis, 15 y 16. A diferencia de los primeros, estos otros Protocolos en ocasiones requieren para su entrada en vigor la ratificación por todos los Estados Parte en el Convenio (por ejemplo, los Protocolos 11 y 14). Todos los Protocolos están en vigor, salvo el nº 10 (que nunca entró en vigor perdiendo su objeto tras la entrada en vigor del nº 11), el nº 14 bis (que dejó de estarlo con la entrada en vigor del Protocolo nº 14) y el nº 15 (que todavía no ha entrado en vigor). El último que ha entrado en vigor es el Protocolo nº 16, el 1 de agosto de 2018<sup>5</sup>. España ha ratificado todos los Protocolos que amplían derechos, mientras que de los de naturaleza procesal se ha limitado a ratificar los Protocolos nº 2, 3, 5, 8, 11 y 14<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 395-396.

<sup>4</sup> *Boletín Oficial del Estado (BOE)* nº 243, de 10 de octubre de 1979.

<sup>5</sup> ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (II)”, en DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18ª ed., Tecnos, 2013, p. 700.

<sup>6</sup> Protocolos nº2 (*BOE* nº 111, de 10 de mayo de 1982), nº 3 y nº 5 (*BOE* nº 243, de 10 de octubre de 1979), nº 8 (*BOE* nº 271, de 11 de noviembre de 1989), nº 11 (*BOE* nº 152, de 26 de junio de 1998) y nº

El CEDH, como hemos visto, protege fundamentalmente derechos civiles y políticos, aunque excepcionalmente algunos de los derechos que contempla, como la libertad sindical (prevista en el artículo 11 dentro de la libertad de reunión y de asociación), tiene una indiscutible dimensión social y económica<sup>7</sup>. El Título I del Convenio Europeo de Derechos Humanos menciona específicamente los siguientes derechos: derecho a la vida; prohibición a la tortura; prohibición de la esclavitud y los trabajos forzados; derecho a la libertad y a la seguridad; derecho a un proceso equitativo; no hay pena sin ley; derecho al respeto a la vida privada y familiar; libertad de pensamiento, de conciencia y religión; libertad de expresión; libertad de reunión y de asociación; derecho a contraer matrimonio; derecho a un recurso efectivo. Este listado se ve ampliado por los Protocolos, pero únicamente respecto de los Estados que los hayan ratificado. Recordemos que España los ha ratificado todos.<sup>8</sup>

El *Protocolo adicional número 1*, adoptado en 1952, añadió esta lista de derechos: a) el derecho al respeto de los bienes, por lo que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley por los principios de Derecho Internacional; b) derecho a la instrucción, respetando el Estado el Derecho de los padres a asegurarla de conformidad con sus convicciones; c) obligación del Estado de organizar periódicamente elecciones libres.<sup>9</sup>

El *Protocolo adicional número 4* prohíbe la privación de libertad por incumplimiento de una obligación contractual y reconoce el derecho de toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado parte a la libre circulación por el territorio de

---

14 (BOE nº 130, de 28 de mayo de 2010). Datos fundamentalmente obtenidos en ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (II)”, *op. cit.*, p. 701.

<sup>7</sup> *Artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Libertad de reunión y de asociación*. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado.

<sup>8</sup> MORTE, C., El Convenio Europeo de Derechos Humanos: primeros pasos para la reforma. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época, Vol. 5, 2004, p. 761.

<sup>9</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 399



dicho Estado y a escoger libremente su residencia. También prohíbe la expulsión de nacionales o que se niegue a una persona la entrada en el territorio del Estado del que fuese nacional y la expulsión colectiva de extranjeros.<sup>10</sup>

El *Protocolo adicional número 6* establece la abolición de la pena de muerte y dispone en su artículo 1 que nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutarlo. Se completa así el artículo 2 del Convenio relativo al derecho a la vida, ya que esta disposición dejaba fuera de su ámbito de aplicación “la ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena”.

<sup>11</sup>Este Protocolo sería completado a su vez por el *Protocolo adicional número 13* destinado a la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia.<sup>12</sup>

El *Protocolo adicional número 7*, adoptado el 22 de Noviembre de 1984, prohíbe la expulsión arbitraria de extranjeros; reconoce nuevas garantías procesales, como el derecho de recurso contra una condena penal, el derecho a obtener indemnización del Estado cuando una condena es anulada o se produzca un indulto a causa de error judicial; así como el principio de la igualdad jurídica de los esposos en derechos y responsabilidades de carácter civil.<sup>13</sup>

Por último, el *Protocolo adicional número 12*, abierto a la firma en Roma el 4 de Noviembre de 2000 con ocasión de las ceremonias conmemorativas del cincuentenario de la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dispone en su artículo 1 una prohibición general de la discriminación al disponer que “*el ejercicio de cualquier derecho reconocido por leyes será asegurado sin ninguna discriminación fundada, en particular, en razón de género, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de*

---

<sup>10</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 399

<sup>11</sup> Protocolo N°6 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte.

<sup>12</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 399

<sup>13</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 400

*cualquier otro tipo, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, riqueza, nacimiento o cualquier otra situación”*.<sup>14</sup>

En cualquier caso, estos derechos reconocidos en el Convenio y sus Protocolos pueden ser objeto de limitaciones y restricciones en la forma que lo autoriza el propio Convenio<sup>15</sup>: a) a través de la formulación de reservas y declaraciones permitidas; b) a través de las limitaciones previstas en la propia definición de los derechos contempladas en el Convenio, que, en todo caso, deben estar previstas por la ley y constituir medidas necesarias en una sociedad democrática para alcanzar alguna de estas finalidades: la seguridad pública; la seguridad nacional; la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros<sup>16</sup>; y c) en caso de estado de excepción (como una guerra o de cualquier otro peligro público que amenace la vida de la nación), supuesto que habilita a los Estados parte a derogar las obligaciones en él establecidas aunque con las debidas garantías (artículo 15 CEDH)<sup>17</sup>.

Por lo que al mecanismo de garantía del CEDH se refiere, ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, resultando la más radical la operada por el Protocolo número 11. En 1950, el CEDH instauró un complejo mecanismo institucionalizado de garantía integrado por tres órganos: la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. La Comisión podía conocer de demandas de un Estado parte contra otro Estado parte en el Convenio, o de demandas presentadas por particulares que se encontrasen bajo la jurisdicción de un Estado Parte siempre que éste hubiera aceptado la competencia de la Comisión. En el primer supuesto su competencia era de carácter obligatorio, mientras que en el segundo era de carácter facultativo u opcional. Era la encargada de decidir sobre la admisibilidad de las demandas; establecer

---

<sup>14</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 400

<sup>15</sup> Vid. al respecto ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (II)”, *op. cit.*, p. 701.

<sup>16</sup> Así, por ejemplo, los párrafos segundos de los artículos en los que se contemplan los siguientes derechos prevén específicamente esta posibilidad: *derecho al respeto de la vida privada y de la familia* (art 8); *del domicilio y la correspondencia* (art 9); *derecho a manifestar la religión o las convicciones* (art 10); *derecho a la libertad de reunión asociación y sindicación* (art 11).

<sup>17</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 401-402.

los hechos; contribuir a los posibles arreglos amistosos; emitir una opinión acerca de si hubo o no violación del Convenio y si decidía no elevar el caso al Tribunal, lo remitía al Comité de Ministros del Consejo de Europa.<sup>18</sup>

En origen, el TEDH, que tenía jurisdicción voluntaria u opcional, quedaba encargado de dictar una sentencia de carácter definitivo y vinculante respecto de los asuntos que le fuesen sometidos únicamente por la propia Comisión o por un Estado parte. En los casos no sometidos al Tribunal<sup>19</sup>, el Comité de Ministros poseía unas competencias cuasi jurisdiccionales, para adoptar una resolución definitiva y vinculante acerca de si hubo o no hubo violación del Convenio atribuible al Estado que hubiera sido demandado ante la Comisión<sup>20</sup>. El *Protocolo adicional número 2* otorgó además competencia consultiva al Tribunal, a fin de que, a petición del Comité de Ministros del Consejo de Europa, pudiera formular opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y sus Protocolos.

La entrada en vigor del Protocolo número 11 modificó radicalmente el mecanismo de garantía establecido en 1950, al desaparecer la Comisión, al establecer un único órgano de control, de naturaleza jurisdiccional, de carácter permanente y jurisdicción obligatoria (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), y al limitar las funciones del Comité de Ministros al control de la ejecución de sentencias del Tribunal. Además, se reconoció a los particulares el derecho de presentar demandas directamente ante el renovado Tribunal<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 409-410.

<sup>19</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 396.

<sup>20</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 396

<sup>21</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 396

Actualmente, el TEDH está compuesto por un número de jueces igual al de los Estados partes en el Convenio<sup>22</sup>. Su mandato es de nueve años no renovables (artículo 23.1 CEDH). Y tiene tanto competencia consultiva como contenciosa.

Su competencia contenciosa se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus Protocolos que le son sometidos por aquellos que poseen la legitimación activa para ello. De acuerdo con lo establecido en los art 33 y 34 del CEDH, pueden acudir al Tribunal y plantear demandas ante él: 1) un Estado Parte, que someta al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus Protocolos del que a su juicio pueda ser imputado a otro Estado parte (artículo 33 CEDH). Hay que destacar que estas demandas interestatales pueden ser interpuestas por cualquier Estado parte, aunque no sea el de nacionalidad de las víctimas de las violaciones alegadas; 2) todo individuo, organización no gubernamental o todo grupo de personas particulares que aleguen ser víctimas de una violación del Convenio o de sus Protocolos por un Estado parte (Art. 34 CEDH), sin ser tampoco necesario el requisito de la nacionalidad. Esta definición de la legitimación activa ante el TEDH pone de manifiesto la nota de garantía colectiva que caracteriza el mecanismo jurisdiccional del sistema europeo de protección de derechos humanos, en el que se supera el requisito de la nacionalidad de la reclamación como uno de los grandes requisitos para la puesta en práctica de la responsabilidad internacional de un Estado<sup>23</sup>.

Para que el Tribunal pueda entrar en el examen de fondo de las violaciones alegadas por un particular, la demanda ha de cumplir con rigurosos requisitos de admisibilidad y únicamente las que superen estos requisitos podrán ser consideradas en cuanto al fondo. El Tribunal considera inadmisibile cualquier demanda individual que estime incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos adicionales por alguna de estas causas previstas en el artículo 35 CEDH: a) cuando no se hayan agotado las vías de recursos internas, b) cuando no se haya presentado en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva, c) cuando sea anónima, d) cuando sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal

---

<sup>22</sup> BONET PÉREZ, J. y BONDÍA, D.: “La Carta Social Europea”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 411

<sup>23</sup> BONET PÉREZ, J. y BONDÍA, D.: “La Carta Social Europea”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 412-413

o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos, e) cuando la demanda sea incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva<sup>24</sup>; o f) cuando el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, “a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional”.<sup>25</sup>

En cualquier caso, las partes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en los que son parte (artículo 46.1 CEDH). Por tanto, las sentencias del TEDH tienen efecto de cosa juzgada respecto del Estado demandado. No obstante, en segundo lugar, también se ha dicho que estas sentencias tienen efecto de cosa interpretada con efectos *erga omnes*, ya que el Tribunal no solo tiene competencias para aplicar el Convenio, sino también para interpretarlo. El efecto de cosa interpretada de las sentencias del Tribunal tiene, por consiguiente, alcance general, esto es, respecto de todos los Estados parte en Convenio. Las autoridades nacionales, por tanto, incluidas las judiciales, deben tomar en consideración la interpretación del Convenio por el Tribunal de Estrasburgo a través de su jurisprudencia, ya que dicha interpretación les vincula jurídicamente<sup>26</sup>.

La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución (art. 46.2 CEDH). Desde la entrada en vigor del Protocolo nº 14, el Convenio prevé que, cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación (artículo 46.3 CEDH). También se otorga competencia al Comité de Ministros para acudir al TEDH en aquellos casos en

---

<sup>24</sup> Esto se puede producir, por ejemplo, cuando: 1) se alegue la violación de algún derecho que no figure entre los reconocidos en el Convenio o en sus Protocolos adicionales; 2) se invoque un derecho reconocido en un Protocolo del que el Estado demandado no sea parte; 3) se refiera a hechos que han acaecido fuera de la jurisdicción del Estado demandado; 4) concierne a hechos anteriores a la ratificación del Convenio o de alguno de sus Protocolos adicionales por parte del Estado demandado.

<sup>25</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p.414

<sup>26</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 418-419.

que un Estado Parte se niegue a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte (artículo 46. 4 y 5 CEDH).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos. Council OF Europe, p. 26. Disponible en: [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_SPA.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf)  
GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 417.

## 2. LA CARTA SOCIAL EUROPEA

El Consejo de Europa adoptó en 1961 la Carta Social Europea (CSE), que, como vimos, fue el segundo gran instrumento de derechos humanos de esta Organización Internacional después del CEDH, caracterizado por ser un tratado internacional que garantiza un conjunto de derechos humanos en el ámbito económico y social. Su adopción fue posible tras un proceso negociador en el que se articuló un compromiso entre las posiciones a favor de una protección social elevada y aquellas que proponían un nivel de exigencia inferior.

### 2.1. CARACTERISTICAS DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA

La CSE, al igual que el CEDH, también ha sufrido un proceso constante de evolución normativa, por otra parte consustancial a cualquier instrumento jurídico relativo a los derechos humanos. Además, al reconocerse en ella derechos de carácter socio-económico, se ha dicho que la evolución de estos derechos, que es mayor que en el caso de derechos de otra naturaleza, ha generado la necesidad de adaptarla a los cambios sociales que han transcurrido desde su adopción<sup>28</sup>.

La *Carta Social Europea* originaria se adoptó el 18 de octubre de 1961 y entró en vigor el 26 de Febrero de 1965. Se compone de un preámbulo, diecinueve puntos (parte I) y treinta y ocho artículos agrupados en cuatro partes (II a V), así como de un anexo. Posteriormente, se adoptaron tres protocolos: a) el *Protocolo adicional a la Carta Social Europea*, de 5 de mayo de 1988, que entró en vigor el 4 de septiembre de 1992, que completa la Carta con nuevos derechos; b) el *Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea* de 1991, que venía a reformar el mecanismo de control, pero que formalmente no ha entrado en vigor, pero que se aplica sobre la base de una decisión adoptada por los Estados; y c) el *Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que prevé un sistema de reclamaciones colectivas* de 1995, procedimiento de control del comportamiento del Estado complementario al sistema de presentación de informes previsto en la Carta. El 3 de mayo de 1996 se adoptó la *Carta Social Europea revisada*

---

<sup>28</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D, “La Carta Social Europea”, en *La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, p. 447.

que entró en vigor el 1 de julio de 1999. Se compone de un preámbulo, treinta y un puntos (parte I); de cuarenta y ocho artículos (treinta y un artículos numerados del 1 al 31 y catorce artículos numerados de la A a la O), que constituyen sus partes II a V, así como de un anexo que precisa el alcance de los diversos artículos.<sup>29</sup>

Se ha dicho que la Carta revisada “*tiene en cuenta la evolución producida en el derecho del trabajo y en la concepción de políticas sociales desde la elaboración de la Carta en 1961*”, y desde esta perspectiva, adapta el sistema de la Carta a los nuevos tiempos<sup>30</sup>. Su adopción no responde, sin embargo, a la técnica de los tratados internacionales suplementarios, que es el modelo hasta ahora adoptado por el CEDH. Esto es, no es ni un Protocolo de enmienda de la CSE, ni tampoco se trata de un Protocolo adicional a la misma<sup>31</sup>. Por el contrario, y como se deduce de su articulado, se trata de un tratado internacional autónomo, pero de carácter complementario a la CSE<sup>32</sup>. Así, la CSE revisada, si bien integra el contenido de la CSE y del Protocolo de 1988, introduce también nuevos derechos económicos y sociales que no fueron contemplados anteriormente. En todo caso, se prevé expresamente que ningún Estado Parte de la CSE o de la CSE y del Protocolo de 1988 puede aceptar, al prestar su consentimiento para ser Parte de la CSE revisada, un número de disposiciones menor a las que hubiera aceptado como Parte de la CSE y del Protocolo de 1988, ya que ha de aceptar al menos las disposiciones de la CSE revisada correspondientes a las disposiciones que había

---

<sup>29</sup> El 5 de noviembre de 1990, en el marco de una Conferencia ministerial informal sobre los derechos humanos, uno de los temas tratados fue la Carta Social Europea y la necesidad de abrir un debate sobre su papel, contenido y funcionamiento. Dicho debate se trasladó, por recomendación de la Conferencia ministerial, al Consejo de Ministros, que decidió, en su 449ª reunión (noviembre – diciembre 1990), autorizar la formación de una Comisión ad hoc para que estudiara la mejora de la CSE. Durante la 12ª reunión de dicha Comisión, del 10 al 14 de octubre de 1994, esta presentó su propuesta de Carta Social Europea revisada, adoptada finalmente por el Consejo de Ministros el 3 de abril de 1996, tras consultar a la Asamblea Parlamentaria y al Comité de expertos (TERRÁDEZ SALUM, D. “La Carta Social Europea en el Ordenamiento Constitucional Español”, Tesis doctoral. Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. Departamento de los Derechos Constitucional, Ciencia, Política y de la Administración, Valencia, 2014, p. 32).

BELORGEY, J-M., La Carta Social Europea y su Órgano de Control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. UNED Revista de Derecho Político, pp. 349-350.

<sup>30</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 472.

<sup>31</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 473.

<sup>32</sup> Su artículo “K” permite a cualquier Estado Miembro del Consejo de Europa ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo como formas de manifestación del consentimiento, con independencia de si eran Estados Partes de la Carta Social Europea, sin perjuicio de que se realice una especial consideración de la situación de los Estados Partes de la Carta Social Europea y de aquéllos que también lo son del Protocolo de 1988. Vid. al respecto BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 473.



aceptado conforme a la CSE y al Protocolo de 1988. Esta previsión del artículo B.1 de la CSE revisada recoge, por tanto, un principio esencial en este ámbito, como es el principio de conservación de estándares jurídicos internacionales previamente aceptados<sup>33</sup>.

Además, su artículo B establece como otro principio esencial en este ámbito la no duplicidad de las obligaciones jurídicas internacionales; esto es, para el Estado que se convierte en Parte de la CSE revisada se dejarán de aplicar, a partir de la entrada en vigor de ésta, las disposiciones de la CSE y de su Protocolo de 1988. Su objetivo es, por tanto, sustituir progresivamente a la Carta originaria, lo que todavía no ha logrado.<sup>34</sup>

En la actualidad, la CSE revisada cuenta con 33 Estados Parte, de los cuales 27 lo eran también de la Carta originaria, por lo que actualmente la CSE de 1961 sólo contaría con 10 Estados Partes (de los 37 que en total la ratificaron en su día). Esto supone que quedan fuera del sistema de la CSE 4 Estados miembros del Consejo de Europa: Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. Por lo que a los Protocolos Adicionales se refiere, los dos de naturaleza facultativa, son Parte en el Protocolo de 1998, 13 Estados y en el Protocolo de 1995, 15 Estados<sup>35</sup>.

Aunque ambas Cartas son tratados internacionales vinculantes, a diferencia de lo que sucede en el CEDH, los derechos que reconocen (tanto en su modelo originario como en el revisado) no son exigibles en su totalidad a los Estados partes<sup>36</sup>. El compromiso alcanzado en su seno destaca, principalmente, por permitir una ratificación flexible de sus disposiciones. El sistema presenta, por tanto, una importante particularidad al juntar en un mismo texto, por un lado, un catálogo completo de derechos y, por otro lado, la posibilidad de aceptación parcial de sus disposiciones, en función de la evolución del contexto económico, del nivel de riqueza de cada Estado y de las singularidades de sus

---

<sup>33</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 473.

<sup>34</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 pp 473.

<sup>35</sup> Datos de los tratados obtenidos en página de la Oficina de Tratados del Consejo de Europa: <https://www.coe.int/fr/web/conventions>.

<sup>36</sup> ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (II)”, *op. cit.*, p. 702.

sistemas sociales<sup>37</sup>. Su alcance se ve, por tanto, condicionado por la inclusión en el propio instrumento jurídico de un precepto que limita la eficacia de los objetivos que se quieren lograr y de esta manera restringir las obligaciones que asumen los Estados<sup>38</sup>.

El sistema de la CSE se caracteriza, por tanto, por poder elegir “*a la carta*” las disposiciones que se aceptan. Se presenta como una especie de “*menú*” de derechos entre los que los Estados parte pueden, elegir qué derechos aceptan y cuáles no, eso sí con alguna restricción. Así, se configura un núcleo duro de derechos que todos los Estados deben reconocer y garantizar al ratificar la CSE, aunque también aquí se deja una cierta capacidad de decisión a los Estados. Además, se establece un número mínimo de derechos a los que se deben obligar los Estados en el momento de incorporarse al tratado, si bien se abre la posibilidad de asumir nuevas obligaciones en cualquier momento posterior (por ejemplo, art. 20.3 de la CSE originaria). Las condiciones difieren, sin embargo, entre una Carta y otra, siendo más exigentes las de la Carta revisada.<sup>39</sup>

De este modo, para llegar a ser Parte de la CSE originaria, y de conformidad con su artículo 20, los Estados deben obligarse, al menos, a cinco de los siete artículos de la Parte II siguientes: arts. 1, 5, 6, 12, 13, 16 y 19. Estos preceptos se refieren a los siguientes derechos: *el derecho al trabajo* (art. 1); *el derecho sindical* (art. 5); *el derecho de negociación colectiva* (art. 6); *el derecho a la seguridad social* (art. 12), *el derecho a la asistencia social y médica* (art. 13); *el derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica* (art. 16) y *el derecho de los trabajadores migrantes y de sus familias a protección* (art. 19). Los Estados deben obligarse, además, por un número adicional de artículos o párrafos numerados de la Parte II de la Carta que elija dicha Parte Contratante, siempre que el número total de los artículos y de los párrafos numerados a los que quedará obligada no sea inferior a 10 artículos o a 45 párrafos numerados.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D, “La Carta ...”, *op. cit.*, p. 443.

<sup>38</sup> DIAZ BARRADO, C.M; , *op. cit.*, pp 248.

<sup>39</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D; , “ La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 pp. 447-449-452.

<sup>40</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D; , “ La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 452

Por su parte, la CSE revisada sigue idénticos planteamientos que la Carta originaria respecto de la flexibilidad que otorga a los Estados en cuanto a la asunción de obligaciones jurídicas, aunque obliga a un mayor compromiso. Así, su artículo A exige a los Estados obligarse por al menos 6 de los 9 artículos siguientes de la Parte II: artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20. Esto es, se añaden dos nuevos derechos en el núcleo duro de derechos económicos y sociales: *el derecho de los niños y adolescentes a protección* (art 7); y *el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón de género* (art 20). Además, deberán obligarse por un número adicional de artículos o párrafos numerados de la Parte II de la Carta que el Estado elija, siempre que el número total de los artículos y de los párrafos numerados a los que quedará obligado no sea inferior a 16 artículos o a 63 párrafos numerados. Todos los derechos de la Carta no aceptados deben ser considerados principios o aspiraciones de política pública, que los Estados partes podrán alcanzar en un futuro<sup>41</sup>.

Al igual que el CEDH, el sistema que establece la CSE se compone: de una parte, de un listado de derechos, si bien en este caso, se trata de derechos económico y sociales; y de otra parte, de un mecanismo de garantía de esos derechos frente al incumplimiento por parte de los Estados. A diferencia del mecanismo del CEDH, las técnicas de control de la Carta responden a un modelo no judicial, en los términos que veremos a continuación, una vez que hayamos realizado una breve referencia a los derechos que contempla.<sup>42</sup>

## 2.2 LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CARTA SOCIAL EUROPEA

En primer lugar, y por lo que a la CSE de 1961 se refiere, su preámbulo define, de manera general, los objetivos que se quieren conseguir, a saber: el disfrute de los derechos sociales sin discriminación, pues entendió que los derechos sociales debían ser disfrutados sin ningún tipo de discriminación alguna basada en motivos de raza, color,

---

<sup>41</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p.452 (pie de página 41)

BELORGEY, J-M., La Carta Social Europea y su Órgano de Control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. UNED Revista de Derecho Político, p. 351.

<sup>42</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 454

sexo, religión, opinión política, proveniencia nacional u origen social, al igual que los derechos civiles y libertades públicas; la mejora del nivel de vida y la promoción del bienestar de la población de los Estados contratantes<sup>43</sup>.

Su Parte I presenta en diecinueve puntos los derechos especificados en la Parte II. Estos diecinueve puntos constituyen los principios fundamentales de la CSE. Ciertamente es que, en el momento de ratificar la CSE, las Partes tienen derecho a no aceptar sino cierto número de compromisos especificados en ella, pero todos los derechos de la Carta no aceptados deben ser considerados principios o aspiraciones de política pública, que los Estados partes podrán alcanzar en un futuro. El artículo 20.1.a) prevé expresamente que, al ratificar la Carta, cada Estado se compromete a considerar la Parte I de este instrumento como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados. La importancia de estos principios de la Parte I queda reforzada por la previsión de que cada Estado puede extender progresivamente su aceptación a otras disposiciones (art. 20.3 CSE).<sup>44</sup>

Además, por otro lado, el artículo 31.1 dispone que estos principios, una vez llevados a la práctica, no podrán ser objeto de restricciones o limitaciones que no estén especificadas en la Parte I, “salvo las establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres”. Es decir, su Parte I no es solo una mera declaración de intenciones, sino que los Estados se responsabilizan a no retractarse después sobre medidas de progreso social llevadas a cabo anteriormente<sup>45</sup> y vinculan a los Estados en la medida en que éstos no pueden adoptar medidas legislativas o administrativas que les sean contrarias.

En tercer lugar, la Parte II de la CSE, que se compone de diecinueve artículos, enumera todos los derechos garantizados por este tratado internacional. En su articulado no se

---

<sup>43</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 454.

<sup>44</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 454.

<sup>45</sup> El artículo 31, dispone “los derechos y principios enunciados en la Parte I, una vez llevados a la práctica no podrán ser objeto de restricciones o limitaciones que no estén especificadas...” BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 454.

incluye solo derechos de carácter individual, sino también derechos de carácter colectivo. Contiene, por tanto, un listado con los diecinueve derechos sociales siguientes: *“Derecho al trabajo para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo”* (art 1); *“Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas”* (art 2); *“Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo”* (art 3); *“Derecho a una remuneración equitativa”* (art 4); *“Derecho Sindical”* (art 5); *“Derecho a la negociación colectiva”* (art 6); *“Derecho de los niños y adolescentes a protección”* (art 7); *“Derecho de las trabajadoras a protección”* (art 8); *“Derecho a la orientación profesional”* (art 9); *“Derecho de formación profesional”* (art 10); *“Derecho a la protección de la salud”* (art 11); *“Derecho a la Seguridad Social”* (art 12); *“Derecho a la asistencia social y médica”* (art 13); *“Derecho a los beneficios de los servicios sociales”* (art 14); *“Derecho de las personas físicas o mentalmente disminuidas a la formación profesional y a la readaptación profesional y social”* (art 15); *“Derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica”* (art 16); *“Derecho de las madres y los niños a una protección social y económica”* (art 17); *“Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras partes contratantes”* (art 18); *“Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia”* (art 19)<sup>46</sup>.

Algunos de estos derechos sociales se encuentran especialmente vinculados entre sí, pudiendo, de este modo hacerse grupos entre ellos, como, por ejemplo, los artículos 1 a 4 de la CSE, que garantizan el derecho al trabajo, el derecho a condiciones de trabajo equitativas, el derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo y el derecho a una remuneración equitativa. Por otro lado, dos artículos de la CSE se refieren a los derechos sindicales: el artículo 5 relativo al derecho sindical propiamente dicho y el artículo 6 relativo al derecho de la negociación colectiva. Además, los artículos 9, 10 y 15 garantizan los derechos relativos a la formación profesional<sup>47</sup>. En este listado de derechos sociales, la CSE tiene también en cuenta diferentes categorías de personas a las que reconoce determinados derechos o establece singulares medidas de protección y

---

<sup>46</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 455.

<sup>47</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 456.

ello dependiendo de su actividad laboral, en función de su edad o bien en razón de circunstancias personales o sociales en las que se encuentran<sup>48</sup>.

El Protocolo adicional de 1988 amplió este catálogo de derechos de la CSE originaria con cuatro nuevos derechos: el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, sin discriminaciones por razones de sexo; el derecho a la información y consulta dentro de la empresa, en relación con la situación de la empresa o con las situaciones que afecten a sus intereses; el derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral; y el derecho a la protección social de las personas mayores.<sup>49</sup>

La CSE revisada, por su parte, adoptó una estructura similar a la CSE originaria, aunque ampliando el catálogo de derechos. Esto tuvo una primera consecuencia en la Parte I, en la que los derechos y principios pasaron de quedar contemplados en diecinueve puntos a treinta y uno. En consecuencia, el catálogo de derechos de la parte II también quedó integrado por treinta y un derechos sociales, que comprendían los derechos de la CSE y del Protocolo de 1988, a los que añade otros nuevos y algunas modificaciones a los ya contemplados anteriormente. Las principales innovaciones de la CSE Revisada en este plano se concretan en los siguientes derechos: a) *el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón de sexo* (nuevo artículo 20) y *el derecho de los trabajadores que tengan responsabilidades familiares a una igualdad de trato* (nuevo artículo 27); b) *diversos derechos que atañen a las relaciones laborales, como el derecho a la información y a la consulta* (nuevo artículo 21); *el derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo* (nuevo artículo 22); *el derecho a la protección en caso de despido* (nuevo artículo 24); *el derecho a la protección de los haberes en caso de insolvencia del empleador* (nuevo artículo 25); *el derecho a la dignidad en el trabajo* (nuevo artículo 26); y *el derecho de los representantes de los trabajadores a una protección y a la facilidades en la empresa* (nuevo artículo 28); c) *el derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo* (artículo 29); *el*

---

<sup>48</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 455.

<sup>49</sup> SALCEDO, C., “Carta Social Europea y Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales: innovación directa en sede judicial”, Universidad de Valencia, 2015, p. 14.

*derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social* (nuevo artículo 30)<sup>50</sup>; y d) *el derecho a la vivienda* (nuevo artículo 31)<sup>51</sup>.

### 2.3 EL MECANISMO DE CONTROL DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA

La garantía del goce y disfrute de los derechos económicos y sociales a la que se comprometen los Estados Parte de la CSE se vincula internacionalmente a la exigencia de que los Estados Parte se sometan a un sistema de control a través del cual se examine la actuación de las autoridades estatales y se valore la efectividad de aquellas medidas legales y administrativas dirigidas a ejecutar los compromisos adquiridos. Este sistema de control del cumplimiento de la Carta viene previsto en la Parte IV de la CSE (artículos 21 a 29), a la que se remite directamente el artículo C de la CSE revisada, tal y como ha sido modificado por el Protocolo de 1991, que se aplica, como vimos, sobre la base de una decisión adoptada por el Comité de Ministros.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> En este derecho, el término pobreza no hace únicamente referencia a las situaciones prolongadas de pobreza extrema, a lo largo de varias generaciones, sino además a las situaciones puntuales que entrañan un riesgo de pobreza. Por lo que se refiere al término exclusión social, el Informe explicativo de la Carta Social Europea revisada, especifica que dicha situación puede darse en personas que padezcan impedimentos o circunstancias degradantes incluso en personas que sin ser pobres, no pueden acceder a determinados servicios sociales por haber padecido una larga enfermedad, haber salido del entorno penitenciario o padecer una toxicomanía. De esta manera, podemos decir, que el artículo 30 engloba tanto a las personas que son víctimas de hecho de una situación de pobreza o de exclusión, como a las personas que pueden estar en riesgo de sufrir tales situaciones, un enfoque mucho más acorde con la situación actual y mucho más inclusivo (TERRÁDEZ SALUM, D. “*La Carta Social Europea en el Ordenamiento Constitucional Español*”, Tesis doctoral. Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. Departamento de los Derechos Constitucional, Ciencia, Política y de la Administración, Valencia, 2014, pp. 32 y 33).

<sup>51</sup> Artículo 31: “*Derecho a la vivienda*. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas: 1) a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; 2) a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; 3) a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes”. Este artículo establece el derecho a una vivienda y su texto obliga a los Estados a tomar medidas para hacer extensible el derecho a una vivienda digna a toda persona, rebajando los costes y promoviendo las viviendas sociales. En relación al derecho a la vivienda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, ya había declarado el carácter fundamental de dicho derecho. Para un análisis detallado de dicha jurisprudencia, véase KENNA, P. “*El derecho a la vivienda: obligaciones positivas y derechos exigibles (especial referencia a los estándares internacionales)*”, *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, número 12, 2008; del mismo autor “*El derecho a la vivienda en Europa: deberes positivos y derechos exigibles (según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)*”, *Revista de Derecho Político*, número 74, 2009).

BELORGEY, J-M., La Carta Social Europea y su Órgano de Control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. UNED Revista de Derecho Político, pp. 350-351.

<sup>52</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 458.

El sistema de control previsto en la atribuye competencias a tres órganos<sup>53</sup>. A diferencia de lo que ocurre en el CEDH, cuyo mecanismo de protección gira en torno al TEDH, en la CSE este órgano principal es el Comité Europeo de Derechos Sociales (en adelante, Comité o CEDS), que, si bien está integrado por expertos independientes, no responde al modelo judicial<sup>54</sup>. Las competencias del CEDS son esencialmente de carácter jurídico. Se ocupa de determinar si los países han cumplido las diversas obligaciones que han contraído en virtud de la CSE<sup>55</sup>, aunque los exámenes de situación efectuados por el Comité no tratan sólo sobre los textos constitucionales, legislativos o reglamentarios vigentes en los Estados concernido, sino también sobre las prácticas nacionales<sup>56</sup>. Su competencia en este ámbito, se traduce, por tanto, en que ha de examinar los informes sometidos periódicamente por los Estados Parte conforme a la CSE; y por otra parte, adopta la decisión sobre la admisibilidad y elabora un informe sobre las reclamaciones colectivas presentadas conforme al Protocolo adicional de 1995.<sup>57</sup>

Los otros dos órganos del sistema son: a) el Comité Gubernamental de la Carta Social Europea y del Código Europeo de Seguridad Social, compuesto por un representante de cada una de las Partes Contratantes (art. 27.2 CSE), cuya competencia consiste en la

---

<sup>53</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 461.

NUTONI, C., La Carta Social en resumen, Directorate of communication and research printed in the council of Europe workshops, 2007, p. 10.

<sup>54</sup> Desde 1998 el “Comité de Expertos Independientes” previsto en la CSE se llama “Comité Europeo de Derechos Sociales”. Por decisión del Comité de Ministros adoptada en su 751ª reunión, celebrada del 2 al 7 de mayo de 2001, este órgano está integrado actualmente por quince miembros. El Protocolo de enmienda de 1991 preveía que fueran elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero esta disposición es la única que no se aplica de este Protocolo, por lo que los miembros del Comité siguen siendo elegidos por el Comité de Ministros. Son elegidos de entre una lista de expertos de máxima integridad y de competencia reconocida en cuestiones sociales nacionales e internacionales, propuesta por las Partes Contratantes (art. 25 CSE).

NUTONI, C., La Carta Social en resumen, Directorate of communication and research printed in the council of Europe workshops, 2007, p. 10.

<sup>55</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004, p. 461.

BELORGEY, J.-M., La Carta Social Europea y su Órgano de Control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. UNED Revista de Derecho Político, p.354.

NUTONI, C., La Carta Social en resumen, Directorate of communication and research printed in the council of Europe workshops, 2007, p. 10.

<sup>56</sup> BELORGEY, J.M. “La Carta Social Europea del Consejo de Europa y su órgano de control: el Comité Europeo de Derechos Sociales”, Revista de Derechos Político, nº70, 2007.

NUTONI, C., La Carta Social en resumen, Directorate of communication and research printed in the council of Europe workshops, 2007, p.10

<sup>57</sup> NUTONI, C., La Carta Social en resumen, Directorate of communication and research printed in the council of Europe workshops, 2007, p. 10



preparación de las decisiones del Comité de Ministros, informándole de las situaciones que a su juicio deberían ser objeto de recomendaciones dirigidas a los Estados interesados y elevándole propuestas a fin de que se inicien estudios sobre cuestiones sociales y sobre artículos de la Carta que podrían ser actualizados (art. 27.3 y 4 CSE); y b) el Comité de Ministros del Consejo de Europa, interviene en la última etapa del mecanismo de control adoptando resoluciones y recomendaciones; en particular, su función consiste en adoptar, sobre la base del informe del Comité Gubernamental, una resolución general después de cada periodo de control correspondiente al mecanismo de presentación de informes periódicos, que puede complementarse con recomendaciones individuales dirigidas a los Estados Parte (art. 28 CSE). Por tanto, el Comité de Ministros aparece también aquí, como en el ámbito del CEDH, en la fase de control de la aplicación por parte de los Estados de los compromisos asumidos en el marco de estos tratados. Esta característica puede ser considerada como uno de los factores negativos del procedimiento de informes, debido al propio carácter del órgano, puesto que está compuesto por los representantes de los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa y esto puede provocar el riesgo de que lo político se superponga a lo estrictamente jurídico.<sup>58</sup>

Por lo que se refiere a los mecanismos de supervisión, la CSE contempla como único mecanismo de supervisión la presentación de informes periódicos<sup>59</sup>. En 1995, se adoptó, como vimos, un nuevo Protocolo Adicional dirigido a crear un mecanismo de carácter complementario. Decididos a tomar nuevas medidas tendentes a mejorar la aplicación efectiva de los derechos sociales que la CSE garantiza, se consideró que este objetivo podría alcanzarse específicamente a través de un procedimiento de reclamaciones colectivas que, entre otras cosas, se encargaría de reforzar la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales. De este modo, los mecanismos de supervisión vinculados al sistema de la CSE son actualmente dos: el procedimiento de presentación de informes periódicos y el procedimiento de reclamaciones colectivas, pero únicamente el primero resulta aplicable a todos los Estados Partes en la Carta. El procedimiento de reclamaciones colectivas sólo se

---

<sup>58</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 pp.461-462

<sup>59</sup> Este mecanismo de supervisión tiene como referente, a pesar de sus sensibles diferencias, el sistema de supervisión previsto en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo- artículos 19, 22 y 23- (VALTICOS, N; Y VON POTOSBKY, G., *International Labour Law*. Second edition revised, Kluwer Law and Taxations Pub, Deventer/Boston 1995, p. 312.

aplicará a aquellos Estados que hayan ratificado el Protocolo adicional de 1995, que como vimos, en la actualidad son sólo 15<sup>60</sup>. Veamos ahora con mayor detalle en qué consisten ambos procedimientos y las consecuencias que se derivan de su puesta en marcha.

En cuanto al sistema de *presentación de informes periódicos*, es un mecanismo de supervisión obligatorio para todos los Estados que forman parte del sistema de la CSE e implica la presentación periódica de un informe por cada Estado parte sobre la aplicación en su legislación y en la práctica nacional de las disposiciones de la Parte II de la CSE que haya aceptado, así como “*sobre las disposiciones de la Parte II de la Carta que (...) no hubieren aceptado en el momento de su ratificación o aprobación o en una notificación posterior*”. En definitiva, se trata de que el Estado demuestre que está cumpliendo lo establecido en la CSE y que ha corregido los errores o situaciones de no conformidad con la Carta observados en anteriores conclusiones del CEDS.<sup>61</sup>

Por lo que se refiere a la periodicidad para la presentación de estos informes, por una decisión adoptada por el Comité de Ministros en 2006, las disposiciones de la Carta se repartieron en cuatro grupos temáticos y los Estados envían anualmente un informe sobre cada uno de estos grupos temáticos. Es decir, cada disposición de la Carta es objeto de un informe una vez cada cuatro años. Los cuatro grupos de disposiciones son los siguientes: Grupo 1 - Empleo, formación e igualdad de oportunidades (artículos 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 y 25); Grupo 2 - Salud, seguridad social y protección social (artículos 3, 11, 12, 13, 14, 23 y 30); Grupo 3 – Derechos vinculados al trabajo (artículos 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 y 29); y Grupo 4 - Niños, familias, migrantes (artículo 7, 8, 16, 17, 19, 27 y 31)<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Estos países son: Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Eslovenia y Suecia (información disponible en: [https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/158/signatures?p\\_auth=ibHIZcQ0](https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/158/signatures?p_auth=ibHIZcQ0)).

<sup>61</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 pp. 462-466.

<sup>62</sup> COMITÉ DES MINISTRES, *Charte sociale européenne – Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne – Nouveau système de présentation des rapports en application de la Charte sociale européenne – Proposition du Comité gouvernemental*, Décision, Doc CM(2006)53, point 4.2, 963e reunión, 3 mai 2006. Vid. también Comité de Derechos Humanos, Procedimiento de Presentación de informes por los Estados, disponible en: <http://coguide.info/es/mechanism/comit%C3%A9-de-derechos-humanos-procedimiento-de-presentaci%C3%B3n-de-informes-por-los-estados>.

JIMENA, L., El último bastión en la defensa de los Derechos Sociales: La Carta Social Europea. Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid [en línea], 2014, (29), p. 180

Los informes se presentan al CEDS, que los examinará junto con las observaciones que eventualmente le hayan remitido las organizaciones nacionales del Estados que estén afiliadas a las organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores que hayan sido invitadas a hacerse representar en las reuniones del Comité Gubernamental (art. 24.1 CSE). Sobre el procedimiento ante este órgano, cabe realizar las siguientes observaciones. En primer lugar, se permite invitar a un representante designado por la OIT para participar a título consultivo en las deliberaciones del CEDS (art. 26 CSE). En segundo lugar, se prevé en las reglas del procedimiento del CEDS, el nombramiento de relatores para cada disposición normativa de la CSE objeto de análisis, así como de grupos de trabajo de cuatro o cinco miembros para preparar las decisiones del plenario. En tercer lugar, el CEDS podrá dirigirse particularmente a un Estado para pedir información o precisiones complementarias, e incluso convocar y mantener reuniones con el Estado (art. 24.3 CSE), en las cuales podrán participar las organizaciones internacionales que participen en los trabajos del Comité Gubernamental.<sup>63</sup>

En cuarto y último lugar, el CEDS examina, desde un punto de vista jurídico, el informe del Estado para evaluar la conformidad de su legislación y práctica nacional con las obligaciones que se derivan de la CSE (art. 24.2 CSE) y redacta un informe que contiene sus conclusiones (art. 24.1 CSE). Sus “conclusiones” se publican cada año (art. 24.4 CSE) y están disponible al final del ciclo de revisión en el sitio web del CEDS. Estas conclusiones deben ser respetadas por los Estados correspondientes. No obstante, son meramente declarativas, por lo que no tienen fuerza ejecutiva en su orden interno. Esto no obsta para que los Estados (y sus autoridades) tengan que adoptar las medidas necesarias para darles efecto en el derecho interno. El seguimiento de las conclusiones del CEDS es asegurado por el Comité de Ministros, quien, sobre la base de las propuestas del Comité Gubernamental, adopta una resolución que cierra cada ciclo de control y que puede contener recomendaciones individuales dirigidas a los Estados (art. 28 CSE).<sup>64</sup>

Las conclusiones del CEDS, tras ser elaboradas, pasarán al Comité Gubernamental, cuyo órgano a su vez redacta otro documento, desde un punto de vista exclusivamente

---

<sup>63</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 pp. 463-464.

<sup>64</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D., “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 464.

económico y político y que remitirá, junto a dichas conclusiones, al Comité de Ministros del CDE. El Comité Gubernamental, *“prepara las decisiones del Comité de Ministros, seleccionado las situaciones que deberían ser objeto de Recomendaciones”* dejando de este lado, el ámbito jurídico, cubierto por el Convenio Europeo de Derechos Sociales.

Una vez realizado este trámite, va a ser el Comité de Ministros quienes se encargaran de adoptar una Resolución y de emitir Recomendaciones a los Estados *“cuyas legislaciones y prácticas nacionales han sido puestas en duda en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la Carta”*. Esto puede ser uno de los factores negativos del procedimiento de informes, debido al propio carácter del órgano, pues está compuesto por los representantes de los gobiernos de los Estados miembros del CdE y esto puede provocar el riesgo de que lo político se superponga a lo estrictamente jurídico.<sup>65</sup>

Por lo que se refiere al procedimiento de *reclamaciones colectivas*, se trata de un mecanismo similar al previsto en el artículo 24 de la Constitución de la OIT: el procedimiento de reclamaciones de la OIT<sup>66</sup>. En el marco de la CSE, este procedimiento comienza con una reclamación presentada por escrito al Secretario General del Consejo de Europa por alguna de las organizaciones legitimadas activamente<sup>67</sup>. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo de 1995, poseen legitimación activa las siguientes organizaciones: a) las Organizaciones internacionales invitadas a participar en los trabajos del Comité Gubernamental<sup>68</sup>; b) otras Organizaciones No Gubernamentales internacionales dotadas de estatuto consultivo en el Consejo de Europa e inscritas en una lista elaborada por el Comité Gubernamental<sup>69</sup>; c) las Organizaciones nacionales representativas de empleadores y trabajadores; y d) respecto de los Estados que lo hayan aceptado expresamente, las Organizaciones No Gubernamentales Nacionales

---

<sup>65</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 464.

<sup>66</sup> CONSEIL DE L'EUROPE: *Protocol additionnel a la charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives. Rapport explicatif*, en: CONSEIL DE L'EUROPE: *Traités Européennes*, disponible en: <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Cadreprincipal.htm>, párrafo 1.

<sup>67</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 466.

<sup>68</sup> Como vimos, en el momento actual estas organizaciones son: la Confederación europea de sindicatos (CES) para los trabajadores, y para los empleadores Business Europe (ex-UNICE) y la Organización Internacional de empleadores (IOE).

<sup>69</sup> Se puede acceder a este listado de organizaciones en: <https://rm.coe.int/gc-2018-17-bil-list-ingos-01-07-2018/16808bbfbf>.

representativas dentro de su jurisdicción que tengan especial competencia en las materias reguladas por la CSE<sup>70</sup>. Por tanto, a diferencia del TEDH, el CEDS no examina demandas individuales. Dado su carácter colectivo, una reclamación solo puede referirse a cuestiones relativas a la no conformidad de la legislación o de la práctica de un Estado con una disposición de la Carta, pero no puede plantear situaciones individuales, ni de particulares, ni de la propia entidad reclamante. Desde esta perspectiva, y a diferencia de los que ocurre en el ámbito del CEDH, no es necesario que se hayan agotado los recursos internos para presentar una reclamación colectiva ni que la organización que la plantea sea víctima de la violación constatada.

En cuanto a la legitimación pasiva, los Estados frente a los que se presenta una reclamación deben ser Parte del Protocolo de 1995, o bien, si son parte de la Carta Social Europea revisada y no del Protocolo de 1995, haber aceptado expresamente, mediante una notificación al Secretario General del Consejo de Europa, la extensión del sistema de reclamaciones colectivas para el control de sus compromisos adquiridos en virtud de la CSE revisada (art. D CSE revisada)<sup>71</sup>.

En relación con el objeto de las reclamaciones, el artículo 4 del Protocolo de 1995 advierte que deben referirse a disposiciones aceptadas por el Estado afectado, indicando en qué medida el Estado no ha garantizado la aplicación satisfactoria de dicha disposición. Se trata de una exigencia que el CESD ha interpretado de una manera liberal, sin que deba concretarse estrictamente esa conexión a efectos de admisibilidad.<sup>72</sup>

Una vez presentada la demanda, da comienzo un procedimiento de carácter contradictorio y fundamentalmente escrito, siempre que no se el CEDS no adopte una decisión de inadmisibilidad, que implica la finalización del procedimiento: *“En primer lugar, se comunica a las Partes de la Carta Social Europea o de la Carta Social Europea Revisada la decisión de admisibilidad; igualmente se trasmite a los Estados Partes del Protocolo de 1995 y a las organizaciones internacionales invitadas a*

---

<sup>70</sup> En el momento actual únicamente Finlandia ha reconocido este derecho a sus organizaciones nacionales.

<sup>71</sup> BONET PEREZ, J; BONDIA GARCÍA, D: La Protección internacional de los derechos humanos, en los albores del siglo XXI. La Carta Social Europea. Universidad de Deusto Bilbao 2004 pp. 470-471.

<sup>72</sup> BONET PEREZ, J. BONDIA GARCIA, D; “La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 470.

*integrarse en el Comité Gubernamental copia de la reclamación y de las observaciones de las partes en la misma. En segundo lugar, se otorga al Estado contra el que se dirige la reclamación y a la organización reclamante un periodo para, respectivamente, presentar sus observaciones sobre el fondo del asunto y sobre dichas observaciones, las partes podrán aportar igualmente las informaciones y observaciones suplementarias que consideren oportuno (artículos 7, 1 a 3 del Protocolo de 1995), tras una vez que se haya complementado la invitación a los Estados Partes del Protocolo de 1995 así como las Organizaciones Internacionales integradas en el Comité Gubernamental a formular sus propias observaciones. En tercer lugar, sobre la base de una decisión del CEDS, de oficio o a instancia de parte, puede llevarse a cabo una audiencia contradictoria en la que participarán no sólo las partes de la reclamación sino también todas las intervinientes a las que se autoriza presentar observaciones por escrito. En cuarto lugar, el CEDS, emitirá un informe que ha de incluir sus conclusiones sobre la compatibilidad de la actuación del Estado respecto a la disposición objeto de la reclamación. El informe será transmitido al Comité de Ministros y a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, así como a la Organización autora de la reclamación y a los Estados Partes de la Carta Social Europea. En el caso de la Carta Social Europea revisada, incluido el Estado contra quien se dirigió, si bien la misma será hecha pública al mismo tiempo que la resolución del Comité de Ministros o bien pasado cuatro meses de su transmisión a éste y finalmente, el Comité de Ministros adoptará una resolución por mayoría de votos, indicando si la actuación del Estado es o no satisfactoria; si esta es desfavorable por dos tercios de los Estados votantes, emitirá así mismo una recomendación dirigida a ese Estado, debiendo éste manifestar las medidas adoptadas en el ciclo siguiente; en el que, dentro del mecanismo de presentación de informes, le corresponda preceptivamente informar respecto a las disposiciones adoptadas (artículo 10 del Protocolo de 1995) ”<sup>73</sup>.*

En definitiva, el mecanismo de reclamaciones colectivas, ciertamente es un avance sensible en el reforzamiento del sistema de control de la CSE, ya que permite a las organizaciones representativas en el ámbito social denunciar ante un mecanismo cuasi-contencioso las deficiencias de las políticas sociales estatales en ejecución de las obligaciones asumidas conforme a las disposiciones de la CSE, del Protocolo de 1988 y

---

<sup>73</sup> BONET PEREZ. J; BONDIA GARCÍA. D.; *La Protección internacional de los derechos humanos, en los albores del siglo XXI. La Carta Social Europea*. Universidad de Deusto Bilbao 2004, pp. 467-468.

de la CSE revisada, y de esta manera, implicarse mediante sus reclamaciones en el control de la actividad de los Estados Partes del Protocolo de 1995<sup>74</sup>. No obstante, este control queda lejos del sistema instaurado en el CEDH.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “ La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 471.

<sup>75</sup> BONET PEREZ, J. BONDIAGARCIA, D.; “ La protección internacional de los Derechos Humanos, en los albores del siglo XXI”. “La carta social europea”. Universidad de Deusto. Bilbao 2004 p. 471.

## 4. LA CARTA SOCIAL EUROPEA: EL CASO DE ESPAÑA

Examinaremos ahora el modo en que España se ha incorporado al sistema de la CSE y las consecuencias prácticas que esa incorporación ha tenido, poniendo algunos ejemplos que reflejarían el impacto positivo que ha tenido nuestra pertenencia al sistema, pero también de las situaciones de no conformidad con la Carta identificadas por el CEDS y que requerirían de un esfuerzo de adecuación de nuestra legislación y prácticas.

### 4.1. EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DEL SISTEMA DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA

España, en los inicios de su recién estrenada democracia, era un Estado deseoso de incorporarse cuanto antes al conjunto de Estados democráticos y para ello debía de empezar por aceptar los tratados internacionales que en materia de protección de los derechos humanos habían ido surgiendo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, tratados que, por lo demás, se habían tenido en cuenta en la elaboración del elenco constitucional español de derechos. La CSE de 1961 fue uno de esos convenios<sup>76</sup>. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, España se había definido como un Estado Social y democrático de derecho (artículo 1 de la Constitución española), calificación que quedó mejor definida con la ratificación de la CSE de 1961, al incorporar de este modo a nuestro ordenamiento nuevos y mejorados derechos sociales y un nuevo mecanismo de garantía de su disfrute<sup>77</sup>.

España ratificó este tratado el 6 de mayo de 1980, entrando en vigor para nuestro país el 5 de junio de ese mismo año<sup>78</sup>. De este modo, España venía a completar su trayectoria hacia el establecimiento de un sistema integrado de protección de los derechos humanos. Bien es cierto que, antes de esta ratificación, tuvo lugar el primer avance a

---

<sup>76</sup> Así lo recuerda uno de los ponentes constitucionales (concretamente PECES BARBA MARTINEZ, G. *La elaboración de la Constitución de 1978*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 53), al abordar la redacción del anteproyecto constitucional (entre agosto y diciembre de 1977), con relación al título sobre derechos fundamentales, dice: “*se inició el trabajo con mi exposición y las de Fraga y Solé Tura de los documentos que cada uno aportábamos como propuesta. Los ponentes de UCE, que no presentaron texto para este Título, manifestaron que su grupo se remitía al Convenio Europeo, a sus protocolos adicionales y a la Carta Social Europea*”

<sup>77</sup> TERRÁDEZ SALUM, D. “La Carta Social Europea en el Ordenamiento Constitucional Español”, Valencia, 2014, p. 31 Tesis doctoral. Facultad de Derecho, Universidad de Valencia. Departamento de los Derechos Constitucional, Ciencia, Política y de la Administración.

<sup>78</sup> BOE nº 153, de 26 de junio de 1980.



nivel nacional hacia el establecimiento de un sistema de garantías, en este caso de los trabajadores, con la adopción del Estatuto de los Trabajadores, en desarrollo del artículo 35 de la Constitución Española. La adopción del Estatuto de los Trabajadores supuso la concreción de la voluntad del legislador social de establecer una regulación de las relaciones laborales y de sus condiciones adaptada a los nuevos tiempos democráticos.<sup>79</sup>

Al ratificar la CSE, España se obligó a cumplir lo establecido en el conjunto de sus 72 párrafos, y por tanto, los diecinueve derechos que contienen, estableciendo únicamente una declaración en relación con la interpretación y aplicación de los artículos 5 (derecho sindical) y 6 (derecho a la negociación colectiva) de la CSE con el fin de hacerlos compatibles con los artículos 28, 37, 103.3 y 127 de la Constitución española<sup>80</sup>. Desde ese momento, España quedaba también obligada a presentar informes periódicos sobre la aplicación a nivel interno de la CSE. Como vimos, a partir de la decisión del Comité de Ministros de 2006, estos informes se presentan anualmente, pero no sobre la totalidad de la Carta, sino en cada caso sobre uno de los cuatro bloques temáticos de la CSE, completándose cada cuatro años el ciclo completo de control de este instrumento jurídico por el CEDS. El 4 de diciembre de 1990, España denunció el artículo 8.4.b (prohibición del empleo de mujeres en ciertas actividades peligrosas)<sup>81</sup>.

Por otro lado, España no puso reparos en ratificar el 24 de enero de 2000 el Protocolo adicional a la CSE de 1988 y el Protocolo de enmienda de 1991<sup>82</sup>. De hecho, el Consejo de Estado dijo que *“el Protocolo Adicional objeto de consulta no sólo no plantea problemas de aplicación en España sino que concuerda en buena medida con las previsiones y objetivos del derecho interno, de modo que su ratificación no implicará la*

---

<sup>79</sup> Esta disposición de la Constitución Española dispone que: “Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores”. Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, B.O.E nº64, de 14 de marzo de 1980.

JIMENA, L., Retos Pendientes del estado social español: en especial, la ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996. Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas [en línea], 2006, p. 52

<sup>80</sup> BOE nº 153, de 26 de junio de 1980. Vid. también JIMENEZ, F., La Carta Social Europea (REVISADA): Entre el desconocimiento y su rehabilitación como instrumento de coordinación de las políticas sociales europeas. Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

<sup>81</sup> CONSEJO DE EUROPA: *Spain and the European Social Charter*, Country by Country Factsheets, Department of the European Social Charter, January 2018 (Disponible en: <https://rm.coe.int/1-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>).

<sup>82</sup> BOE nº 99, de 25 de abril de 2000 (corrección de errores en BOE nº 220, de 13 de septiembre de 2000).

*necesidad de modificar la legislación vigente*”. En relación con el Protocolo de 1991, determinó que, pese a que dicho Protocolo introducía “ *ciertas modificaciones en relación a las funciones, órganos y funcionamiento de los mecanismos institucionales previstos originariamente, dando carta de naturaleza positiva a algunas prácticas que ya se viene observando*”, dada “ *la importancia política que tiene la carta de Turín de 1961 en el ámbito de los derechos económicos y sociales y los esfuerzos por proveer a su mayor Enmienda de dicha Carta se sitúa en ese plano de trascendencia política*”, era necesaria la preceptiva autorización de las Cortes exigida por el artículo 94.1.a) de la Constitución para su ratificación. No habiendo entrado en vigor formalmente este último protocolo, el Protocolo adicional de 1988 lo hizo para España el 23 de febrero de 2000. De este modo, España quedó vinculada por los cuatro derechos adicionales que establece ese Protocolo.

Sin embargo, nuestro país no ha ratificado ni el Protocolo adicional de 1995 de reclamaciones colectivas, ni la CSE revisada, aunque sí firmó la Carta revisada el 23 de octubre de 2000. Por tanto, España no ha aceptado el mecanismo de reclamaciones colectivas de la CSE, que permitiría a sindicatos, entidades sociales u organizaciones patronales demandar al Estado ante el CEDS por la no conformidad de sus leyes, políticas públicas o prácticas administrativas con las disposiciones de la Carta. Además, si bien los derechos de la Carta y del Protocolo adicional de 1991 se han incorporado de manera automática a nuestro derecho interno, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución, no ocurre lo mismo respecto de las innovaciones introducidas por la CSE revisada en el catálogo de derechos sociales y económicos.<sup>83</sup>

No se saben las razones oficiales por las que nuestro país no se ha obligado por el Protocolo adicional de 1995, puesto que al no haberse siguiera firmado, no ha existido un debate al respecto. No obstante, puede afirmarse que no parece estar en las previsiones del Estado aceptar los compromisos que implica el procedimiento de reclamaciones colectivas, básicamente debido a que dicho procedimiento supone menos independencia frente al Comité Europeo de Derechos Sociales, que, a partir de la ratificación, ya no solo se limitaría a decidir sobre la conformidad con la Carta del

---

<sup>83</sup> MILLONE, C., ¿Es razonable que España no haya ratificado todavía la Carta Social Europea revisada en 1996? Revista Jurídica de los Derechos Sociales, p. 126.

comportamiento nacional, sino que además resolvería sobre reclamaciones colectivas concretas<sup>84</sup>.

Tampoco resulta sencillo entender la falta de ratificación por parte de España de la CSE revisada, menos aun cuando el propio Consejo de Estado en su Dictamen 1740/2000 relativo a la CSE revisada precisó que “*la ratificación de la Carta Social Europea revisada no solo no plantea problemas de aplicación de España sino que concuerda en buena medida con las previsiones y objetivos del derecho interno, de modo que su ratificación no implicara la necesidad de modificar la legislación vigente*”. Bien es cierto que, en este Dictamen, el Consejo de Estado da algunas pistas de la problemática latente cuando, al hacer referencia al informe elaborado por la Secretaria General Técnica, citó literalmente de dicho informe lo siguiente “*se señala que existe cierta reticencia entre los Estados miembros, especialmente los pertenecientes a la Unión Europea a ratificar este texto, si bien la mayoría de ellos lo han firmado. Ello es debido a que se incluyen más obligaciones que en el texto vigente, y a la interpretación que de las mismas y de su alcance realiza el Comité de Expertos Independientes*”<sup>85</sup>.

Sin embargo, pese a que España no ha procedido a la ratificación de la CSE revisada y tampoco a la firma y posterior ratificación del Protocolo adicional de 1995, ambos textos poseen una clara influencia en el marco constitucional español, a pesar de que, de conformidad con el artículo 96.1 de nuestra Constitución, únicamente los tratados internacional válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento interno. Pero no cabe duda de que tanto un texto como el otro tienen cierta presencia en nuestro ordenamiento a través de dos vías indirectas, lo que resulta ciertamente paradójico.

La primera vía vendría constituida por el uso de la argumentación del Comité Europeo de Derechos Sociales por la jurisprudencia, tanto del TEDH, como de nuestros tribunales nacionales, para razonar los fallos y definir de manera concreta los derechos fundamentales aducidos. Esto contribuye a reforzar el carácter judicial de la actividad

---

<sup>84</sup> TERRACIDEZ SALOM, D. “*La Carta Social Europea en el Orden Constitucional Español*”, Valencia, 2014. p 296, Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración.

<sup>85</sup> JIMENA, L., Retos Pendientes del estado social español: en especial, la ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996. Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Pública, p. 53

del CEDS, al menos desde el punto de vista práctico, ya que no tiene consideración oficial de Tribunal<sup>86</sup>. Pero nos interesa más la otra vía, que estaría relacionada con la jurisprudencia del CEDS resultante del examen de las reclamaciones colectivas. Debe tenerse en cuenta que el CEDS incorpora en sus conclusiones a los informes presentados por España, tanto en la definición de los derechos sociales como de las obligaciones estatales, la jurisprudencia adoptada en el marco de los procedimientos de reclamaciones colectivas<sup>87</sup>. Así, en las conclusiones XVI-2 y en relación con el artículo 3 de la CSE (*“derecho a la seguridad e higiene en el trabajo”*), el Comité recordó a España que la garantía de dicho derecho no solo podía ser alcanzada mediante medidas legislativas, sino que debía añadirse un sistema de control riguroso de su efectividad, de acuerdo con lo establecido en la decisión de fondo recaída respecto de la *Reclamación 1/1998 - Comisión de Internacional de Juristas contra Portugal*.

Un ejemplo de la aplicación indirecta de la CSE revisada podemos encontrarlo en las Conclusiones XVIII-1 cuando define el alcance de la prohibición de la discriminación en el ámbito laboral prevista en el artículo 2 de la CSE. Establece que debe contemplar tanto la discriminación directa como la indirecta, definiendo esta última en atención a su decisión sobre la *Reclamación 13/2000, Autismo- Europa contra Francia*. En ella, y de acuerdo con lo establecido en el artículo E de la CSE revisada, consideró establecida la prohibición respecto de *“todas las formas de discriminación indirecta, tanto las que se desprenden de los tratamientos inapropiados de ciertas situaciones, como las que revelan el desigual acceso a las diversas ventajas colectivas de personas en dichas situaciones con respecto a los demás ciudadanos”*<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> JIMENA, L. (op. cit. 482) *“a donde no se ha llegado todavía en el estadio actual es a constituir (según preconizaba asimismo la mencionada Recomendación [Recomendación de la AP 1168/1991 sobre el futuro de la CSE], apostando por una solución decididamente judicial) a la creación de una Sección social o Sala social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”*, de acuerdo asimismo con ENRICH MAS, M *“Les droits sociaux dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des droits de l’Homme”* in Affari Sociali Internazionali, núm. 1, 1992. Véase igualmente AKANDJI-KOMBÉ, J.F.: *“Carta Social Europea y Convenio Europeo de Derechos Humanos: perspectivas para la próxima década”*, in Revista de Derecho Político, Nº 67, 2006, así como CHATTON, G.T.: *“La armonización de las prácticas jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales: una evolución discreta”*, Revista de Derecho Político, Nº 73, 2008. Del último autor, de manera más exhaustiva, su obra reciente CHATTON, G.T.: *Aspects de la justiciabilité des droits sociaux de l’Homme*, Berne, StämpfliEditions, 2012.

<sup>87</sup> TERRACIDEZ SALOM, D. *“La Carta Social Europea en el Orden Constitucional Español”*, Valencia, p. 36 Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia, Política y de la Administración.

<sup>88</sup> Conclusiones XVIII-1 España (2006), art. 2 CSE: *« La législation doit couvrir la discrimination directe ainsi que la discrimination indirecte. S’agissant de la discrimination indirecte, le Comité rappelle avoir indiqué à propos de l’article E de la Charte révisée que celui-ci interdit « toutes les formes de*

En relación con esta misma Reclamación, en las conclusiones XVIII-2 y en relación con los derechos reconocidos por el artículo 15 de la CSE (*“derecho de las personas física o mentalmente disminuidas a la formación profesional y a la readaptación profesional y social”*), el Comité recordó al Gobierno español que la idea subyacente en esta disposición *“es que las personas con discapacidad deben gozar plenamente de la ciudadanía y que sus derechos esenciales son, en virtud de dicho título-la autonomía, la integración social y la participación en la vida de la comunidad. La garantía del derecho a la educación de los niños y demás personas afectadas por una discapacidad constituye a todas luces una condición para alcanzar dicho objetivo”*<sup>89</sup>. En consecuencia, la legislación española debía justificar el mantenimiento de la educación especial basándose en motivos suficientemente sólidos y ofrecer además vías de recurso a las personas que estimaran haber sido excluidas ilegalmente del régimen general educativo.

Las conclusiones XIX-1 volvieron a incidir en el correcto cumplimiento de los compromisos adquiridos respecto del artículo 15 de la CSE, debido a que el informe proporcionado por nuestro gobierno en octubre 2007 no contenía datos actualizados del número de personas con discapacidad, menores incluidos, ni del número de menores integrados en el sistema educativo ordinario y especial. Estos datos debían ser proporcionados al CEDS para que pudiera verificar si existía o no una problemática de discriminación, como había dejado establecido en dos decisiones de fondo<sup>90</sup>, en las que además estableció la obligación del Estado de recoger estos datos.

---

discrimination indirecte, que peuvent révéler soit les traitements inappropriés de certaines situations, soit l'inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux divers avantages collectifs » (Autisme-Europe c. France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bienfondé du 4 novembre 2003, §52 » de acuerdo con la traducción aportada por JIMENA QUESADA, L. op.cit. 460).

<sup>89</sup> Reclamación 13/2002, Autismo-Europa contra Francia, decisión de fondo de 4 de noviembre de 2003; de acuerdo con la traducción de JIMENA QUESADA, L. recogida en su obra, op. cit. 460

<sup>90</sup> Reclamación 15/2003, Centro Europeo de Derechos de los Rom contra Grecia, decisión de fondo de 8 de diciembre de 2004, y reclamación 27/2004, Centro Europeo de Derechos de los Rom contra Italia, decisión de fondo de 7 de diciembre de 2005.

#### 4.2. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR ESPAÑA DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA: ALGUNOS EJEMPLOS

En este epígrafe daremos unas breves pinceladas del modo en que España ha ido adecuando su comportamiento a las obligaciones que ha asumido en el marco del sistema de la CSE. Tomando como referencia las conclusiones adoptadas por el CEDS en relación con España, que hasta ahora ha presentado 30 informes entre 1982 y 2018<sup>91</sup>, citaremos algunos ejemplos que ilustren los progresos realizados por nuestro país en la ejecución de los derechos previstos en la Carta, pero también de las situaciones de no conformidad. Nos fijaremos para ello especialmente en las conclusiones XIX-3 (2014) – grupo temático 3 “derechos vinculados al trabajo”-, XIX-4 (2015) – grupo temático 4 “niños, familias y migrantes”-, XXI-1 (2016) – grupo temático 1 “empleo, formación e igualdad de oportunidades”- y XXI-2 (2017) – grupo temático 2 “salud, seguridad social y protección social”-, como exponentes de un ciclo completo de examen por parte del CEDS.

Por lo que se refiere al impacto positivo que ha tenido la pertenencia de España al sistema de la CSE en el disfrute de los derechos económicos y sociales, se produjo un importante avance en materia de no discriminación, con la adopción de la legislación contra la discriminación en el empleo y en el trabajo (Ley 62/2003); en lo que se refiere a la no discriminación en términos de la nacionalidad, con el refuerzo del poder de negociación de los sindicatos como resultado del número creciente abierto a la negociación colectiva (Ley 7/1990, Negociación Colectiva y Participación en determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios). Otros importantes impactos positivos destacados por el propio CEDS se produjeron con la extensión del beneficio de la asistencia médica a los extranjeros que residían o estaban legalmente en España (Ley 13/1996, entro en vigor el 1 de enero de 1997); con la calidad del tratamiento de empleo, incluido el empleo por cuenta propia, así como con el acceso a servicios sociales y vivienda social para extranjeros que residen legalmente en España (Leyes 4/2000 y 8/2000); con las salvaguardias mejoradas contra la expulsión de ciudadanos extranjeros (Ley 4/2000) y con el derecho reconocido a los ciudadanos

---

<sup>91</sup> Es preciso tener en cuenta que las conclusiones del CEDS al último informe presentado por España se publicarán en enero de 2019.

extranjeros en España, incluso en situación irregular, a la atención de salud pública de emergencia frente a una contracción de enfermedades graves o accidentes (Ley orgánica Derechos y Libertades de los extranjeros en España, de 11 de enero 2000)<sup>92</sup>.

En otro orden de cosas, también llamó positivamente la atención del CEDS la prohibición de que los menores tengan acceso al trabajo por cuenta propia y la prohibición del trabajo nocturno<sup>93</sup>. Otra gran novedad fueron las mejoras del Código Penal con respecto a la explotación sexual, pornográfica y tráfico de menores o el apéndice I de la Ley 54/2007 sobre adopción internacional que modificó el Código Civil para eliminar el “derecho” de los padres y tutores a corregir de forma moderada y razonable a los niños<sup>94</sup>. En materia de protección social, se destacó igualmente la mejora de la cobertura de la seguridad social para los trabajadores autónomos (Real Decreto-Ley 2/2003 y Real Decreto 1273/2003) y la extensión de beneficios de vejez, invalidez y beneficios familiares a todos ciudadanos sin recursos suficientes (Ley 26/1990)<sup>95</sup>.

En sus conclusiones XXI-1 (2016), el Comité llamó la atención sobre la entrada en vigor en 2006 de la Ley Orgánica sobre Educación, que definió un total de 148 cualificaciones profesionales, de las que 108 se definieron en el período de referencia, y del Real Decreto 10/2011 sobre medidas urgentes para promover el empleo de los jóvenes, que venía a reforzar la estabilidad en el empleo y la mejora de la cualificación de esta categoría<sup>96</sup>.

En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, las conclusiones XXI- 2 (2017) del CEDS destacan como evoluciones positivas la adopción de la Ley 3 /2012, de 6 de julio

---

<sup>92</sup> La Carta Social Europea en España. Ficha de España; epígrafe II. Ejemplos de avances en la implementación de los derechos bajo la CSE, visto en: <https://rm.coe.int/l-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>. p. 6

<sup>93</sup> La Carta Social Europea en España. Ficha de España; epígrafe II. Ejemplos de avances en la implementación de los derechos bajo la CSE, visto en: <https://rm.coe.int/l-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>. p. 6

<sup>94</sup> La Carta Social Europea en España. Ficha de España; epígrafe II. Ejemplos de avances en la implementación de los derechos bajo la CSE, visto en: <https://rm.coe.int/l-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>. p. 6.

<sup>95</sup> La Carta Social Europea en España. Ficha de España; epígrafe II. Ejemplos de avances en la implementación de los derechos bajo la CSE, visto en: <https://rm.coe.int/l-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>. p. 7.

<sup>96</sup> European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XXI-1 (2016) (SPAIN), Articles 1, 9, 10, 15, 18 of the 1961 Charter and Article 1 of the Additional Protocol, January 2017, p. 3 (Disponible en: <https://rm.coe.int/16806ebc49>).

de 2012, sobre medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En especial llama la atención sobre la definición que recoge del "*trabajo a distancia*" en su artículo 13 y sobre el reconocimiento a los "trabajadores a distancia" de una protección adecuada en materia de seguridad y salud. El CEDS también señaló algunas novedades de la nueva ley 23/2015, de 21 de julio de 2015, sobre la regulación de la Inspección del Trabajo y del Sistema de Seguridad Social (STSS), como la atribución de nuevas competencias a los subinspectores en materia de prevención de riesgos laborales; la creación de una inspección y seguridad laboral como un organismo autónomo de la administración estatal nacional o la regulación de un organismo nacional para combatir el trabajo no declarado, el empleo ilegal y el fraude de la seguridad social en tanto que órgano especializado del ITSS. Además, la ley regula las funciones y poderes del ITSS, su campo de acción, su organización y colaboración con otras instituciones. Reconoce expresamente la protección del personal, incluso contra actos de violencia, coacción, amenaza o influencia ilícita están a cargo de los inspectores y subinspectores. Igualmente consideró como positivo el nuevo Servicio de Subinspectores de Trabajo, Seguridad Social y Salud Laboral que refuerza las funciones de control de la aplicación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.<sup>97</sup>

Por otro lado, el CEDS destacó como otras evoluciones positivas la integración en el régimen general de seguridad social del régimen especial para el personal doméstico y el régimen agrícola especial (Ley 27/2011, de 1 de agosto de 2011; Ley 28/2011, de 22 de septiembre; Real Decreto Legislativo 29/2012, de 28 de diciembre de 2012) y del clero perteneciente a la federación española de iglesias evangélicas (Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre de 2015, que aplica la sentencia del TEDH de 3 de abril de 2012 en el asunto *Manzanas Martín c. España*); la adopción de medidas que permiten, bajo ciertas condiciones, acumular la percepción de una pensión de jubilación con determinadas actividades profesionales (Real Decreto-ley 5/2013 de 15 de marzo de 2013); la adopción de medidas para ayudar a los autónomos, incluidas reducciones y rebajas en sus contribuciones (Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de 2013, Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013; Ley 25/2015, de 28 de julio de 2015); la reducción de las contribuciones del empleador como parte de los incentivos para comenzar un negocio y para el empleo juvenil (Ley 11/2013, de 26 de julio de 2013);

---

<sup>97</sup> European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XXI-2 (2017) (SPAIN), pp.124 a 129.



las medidas de protección a los trabajadores a tiempo parcial (Real Decreto-Ley 11/2012, de 2 de agosto de 2012; 1/2014 de 28 de febrero de 2014); y la regulación de un convenio especial para personas con discapacidad (Real Decreto 1567/2013, de 1 de marzo de 2013). También se consideró positiva la aprobación en enero de 2013, a nivel nacional, del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. La importancia de este documento, fruto del consenso y trabajo conjunto con las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, adoptado a iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, radica en que enumera todos los servicios que las personas pueden reclamar en todo el territorio español, al tiempo que define los principios comunes de calidad y buen uso.<sup>98</sup>

En sus conclusiones XXI-2 (2017), el CEDS también tomó nota de los avances en materia de educación sanitaria. Destacó que la educación para la salud había sido un componente interdisciplinario de los planes de estudios en las escuelas desde 1989 y las sucesivas leyes habían previsto su inclusión. La educación sanitaria no era una asignatura aparte, se habían recopilado metodologías y materiales sobre el tema a lo largo de 25 años y se habían celebrado jornadas de estudio entre las Comunidades Autónomas que agrupaban a los sectores educativo y sanitario, que trabajaban conjuntamente en todas las Comunidades Autónomas del país. Se mencionaron otras medidas de promoción de la salud, como un programa para mejorar la salud de los jóvenes diseñado para facilitar la difusión de información y estrategias para trabajar con jóvenes en tres áreas clave: salud sexual y reproductiva, consumo de alcohol y salud mental; otro programa para la promoción de la salud en el entorno universitario a través de la Red Española de Universidades Saludables; y medidas relacionadas con la alimentación saludable y la educación nutricional en las escuelas. Por otro lado, se indicó que los controles médicos eran gratuitos durante la educación escolar y se llevaban a cabo en los centros de salud como parte de un "programa de salud infantil". Se señaló, no obstante, que algunas Comunidades autónomas tenían enfoques específicos propios, lo que se traducía en que algunas acciones de salud escolar, como el control de la obesidad, formaban parte de un programa distinto<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XXI-2 (2017) (SPAIN), pp.139-140.

<sup>99</sup> European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XXI-2 (2017) (SPAIN), pp.144 a 146.

Si bien los avances han sido significativos en muchas áreas, España también ha sido condenada en numerosas ocasiones por el CEDS. Así, por ejemplo, en las Conclusiones de 2010 en materia de seguridad y salud en el trabajo, el CEDS detectó ciertos incumplimientos en relación con los trabajadores con contrato de duración determinada, lo que pareció trascendental al Comité debido al alto nivel de trabajadores no permanentes en España. Destacó el incumplimiento sobre la seguridad y salud laboral en este crucial segmento de empleo, relativa literalmente a que las disposiciones sobre trabajadores temporales no son suficientemente efectivas para proteger esta categoría de trabajadores de una manera adecuada<sup>100</sup>. Por otro lado, “*el Comité ya tomó nota de la promulgación de la Ley número 20/2007, de 11 de julio de 2007, de 11 de julio de 2007, relativa al Estatuto de los trabajadores autónomos*” aunque de la misma no se desprende información sobre el alcance que la legislación y las disposiciones de seguridad y salud se aplican a los autónomos, especialmente considerando que, los autónomos alrededor de 3.6 millones de personas, con lo que concluye diciendo que los trabajadores autónomos no están suficientemente protegidos por las disposiciones de seguridad y salud<sup>101</sup>. De estas conclusiones cabe destacar también que el Comité consideró que la situación de España no era de conformidad con el artículo 3.2 de la CSE, por causa del manifiestamente elevado número de accidentes laborales<sup>102</sup>.

También se detectaron importantes incumplimientos en las Conclusiones del CEDS XX-2 (2013), que, entre otras cosas, causaron revuelo al confirmar lo que ya se venía denunciando por numerosas personas y entidades, que la exclusión de las personas extranjeras del Sistema Nacional de Salud, por razón de su situación de irregular en el país constituye una clara discriminación y una violación de la CSE, se está vulnerando concretamente el artículo 11 “Derecho a la protección de la salud”, en tanto que se les

---

<sup>100</sup> MARTINEZ GIRÓN. J.; AURUFE VARELA, A.; La condena del consejo de europa a España, hecha pública en Enero de 2010, por sus incumplimientos de la CSE en materia de seguridad y salud laboral, 15 Junio 2011, p. 284.

<sup>101</sup> MARTINEZ GIRÓN. J.; AURUFE VARELA, A.; La condena del Consejo de Europa a España, hecha pública en Enero de 2010, por sus incumplimientos de la CSE en materia de seguridad y salud laboral, 15 Junio 2011, p. 285.

<sup>102</sup> MARTINEZ GIRÓN. J.; AURUFE VARELA, A.; La condena del Consejo de Europa a España, hecha pública en Enero de 2010, por sus incumplimientos de la CSE en materia de seguridad y salud laboral, 15 Junio 2011, p. 286. Parece que la causa de las intolerables cifras españolas de siniestralidad hay que buscarla en la privatización parcial del subsidio de incapacidad temporal derivado de riesgos comunes, que se operó por el Real Decreto-Ley 5/1992, de 21 julio, de medidas presupuestarias urgentes. La verdad es que nuestras cifras de siniestralidad laboral comenzaron a crecer año tras año. Así, en el año 1998 hubo un total de 804.843 accidentes de trabajo con baja en el trabajo, de los cuales 790.217 fueron de carácter leve, ya en el año 2000 se rebasó la cifra del millón, de los que 988.854 fueron de carácter leve. A partir del 2000 se estabilizó la cifra en torno al millón hasta el año 2005 (ibidem, p. 286).

impide acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con las demás personas sometidas a la jurisdicción del Estado. El Comité indicó que la protección de la salud es un pre-requisito para la dignidad humana, por lo que no permite ampararse en una situación de “crisis económica” como justificación de los recortes sociales y afirma que no debería tener como resultado una reducción de la protección de los derechos reconocidos en la CSE. En esas mismas conclusiones, el Comité criticó duramente el alcance de algunas prestaciones sociales, cuya cuantía y alcance resulta escasa para satisfacer algunos de los derechos contemplados en la CSE. Se refiere sobre todo a las prestaciones por enfermedad o desempleo. El Comité reiteró lo que ya se había comunicado en los anteriores informes: “que el sistema español de rentas en la mayoría de comunidades autónomas no satisface las exigencias de este precepto en la medida que está condicionado a requerimientos de residencia (de 6 meses a 3 años dependiendo de la comunidad), edad (mayores de 25) y duración. Se termina destacando que las prestaciones son adecuadas siempre que no se hallen manifiestamente por debajo del umbral de pobreza, lo que se cumple en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas españolas (a excepción del País Vasco y Navarra)”<sup>103</sup>.

En sus Conclusiones XIX-3 (2014), el Comité constató otros graves incumplimientos por España de los derechos vinculados al trabajo reconocidos en la CSE. Así, por ejemplo, consideró que el Salario Mínimo Interprofesional no aseguraba un nivel digno de vida. El Comité consideró que el salario mínimo interprofesional establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos “no asegura un nivel decente de vida”, recordando que “a fin de garantizar un nivel de vida decente en el sentido del artículo 4.1 de la CSE originaria, la remuneración debe de estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 50% del salario medio neto”. A la vista de las alegaciones expresadas por las organizaciones sindicales (CCOO y UGT), “toma nota de que después de las contribuciones a la Seguridad Social y el impuesto sobre la renta, el SMI, así como el salario mínimo del personal contractual están por debajo del umbral mínimo fijado en el

---

<sup>103</sup> COMISIÓN DE DD.HH, EXTRANJERIA Y PENITENCIARIA; Informe sobre la situación en España en materia de DD.HH; CEAJ, pp 5-6. *Vid.* también European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XX-2 (ESPAGNE), Articles 3, 11, 12, 13 and 14 of the 1961 Charter, November 2014.

50% del salario medio neto y por lo tanto son manifestaciones abusivas en el sentido del artículo 4.1 de la CSE”.<sup>104</sup>

El segundo incumplimiento puesto de relieve por el CEDS en este ámbito se refirió a la falta de preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales y en el contrato de apoyo a los emprendedores introducido por la reforma laboral. España no garantizaba los derechos establecidos en el artículo 4.4 de la CSE, sobre la base de que no se exige un plazo de preaviso razonable en la extinción que decide el empresario en numerosos supuestos, siendo el más llamativo el que se estableció durante el periodo de prueba del contrato de apoyo a emprendedores, introducido por la reforma laboral, al igual que ocurre con otros supuestos de contratación, en los que diversas reformas laborales han suprimido el preaviso, a fin de que la empresa pueda imponer el despido de forma inmediata como sucede con los contratos temporales de duración inferior al año.<sup>105</sup>

En tercer lugar, el Comité afirmó el incumplimiento del Gobierno del derecho de libertad sindical, al no haber establecido un procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales antes de aprobar la reforma laboral. El Comité concluyó que la situación en España no está en conformidad con el artículo 6.2 de la CSE, entre otros motivos, por haberse aprobado el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012, que afectaban de forma muy directa a la negociación colectiva, sin consulta de los sindicatos y las organizaciones patronales. En particular, “el Comité considera en este contexto, que las medidas adoptadas en España son desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos y por tanto, no cumplen con las condiciones establecidas por el artículo 31 de la CSE”. Concluyó igualmente que la reforma laboral Ley 3/2012 no es conforme con la CSE pues “permite a los empleadores de manera unilateral, no aplicar

---

<sup>104</sup> European Social Charter, Comments from Spanish Trade Union Confederation on the 26<sup>a</sup> National Report on the implementation of the European Social Charter Cycle XX-3 (2014) (SPAIN), the pp. 7 a 11.

TERRADEZ, D., La Carta Social Europea en el Orden Constitucional Español, Valencia, 2014, Tesis doctoral, Facultad de Derecho Universidad de Valencia Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia y de la Administración, pp. 24-25.

MILLONE, C., ¿Es razonable que España no haya ratificado todavía la Carta Social Europea revisada en 1996? Revista Jurídica de los Derechos Sociales, pp.126-127.

<sup>105</sup> European Social Charter, Comments from Spanish Trade Union Confederation on the 26<sup>a</sup> National Report on the implementation of the European Social Charter Cycle XX-3 (2014) (SPAIN), pp. 13 a 15

condiciones pactadas en los convenios colectivos” como sucede en el artículo 41 ET con los pactos y acuerdos de empresa.<sup>106</sup>

En cuarto lugar, el Comité destacó la restricción del derecho de huelga y criminalización de la actividad sindical. El derecho a la huelga presentaba restricciones indebidas impuestas por el gobierno, que son contrarias al artículo 6.4 de la CSE, sobre la base de que la legislación autoriza al Gobierno a imponer el arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga, en los casos que van más allá de las excepciones permitidas por el artículo 31 de la CSE. Así es como el derecho a la huelga sufre una gran restricción, debido a que la autoridad gubernativa puede dejarlo sin efecto, a través de una medida que no está suficientemente justificada en las razones excepcionales que permite la propia CSE.<sup>107</sup>

En quinto lugar, en cuanto a la regulación de la jornada flexible, el Comité reprochó a España que nuestra legislación estableciese, para la distribución de la jornada flexible, periodos de referencia de un año, como en el establecimiento de la jornada máxima anual, o en la determinación de la jornada máxima anual, o en la determinación de la jornada irregular que puede libremente imponer el empresario tras la reforma laboral. Se establece lo siguiente: “los periodos de referencia no deben exceder de seis meses. Estos podrán ampliarse a un máximo de un año en circunstancias excepcionales”. Por otro lado, rechazó, que el tiempo de atención continuada, en el ámbito de los profesionales sanitarios, no puede considerarse como tiempo de descanso, es por ello que se entiende que nuestra legislación introduce tal grado de flexibilidad en la jornada de trabajo que no impide que existan jornadas superiores a las 60 horas de trabajo a la semana, lo que incumple el artículo 2.1 de la CSE.<sup>108</sup>

En sexto lugar y por lo que se refiere a las medidas compensatorias para trabajadores en puestos con riesgos para la salud, el Comité consideró que España incumplía la obligación de asegurar que todos los trabajadores expuestos a los riesgos para la salud y la seguridad, tienen derecho a medidas compensatorias, como la reducción de las horas

---

<sup>106</sup> European Social Charter, Coments from Spanish Trade Union Confederation on the 26<sup>th</sup> National Report on the implementation of the European Social Charter Cycle XX-3 (2014) (SPAIN), pp. 15 a 18

<sup>107</sup> European Social Charter, Coments from Spanish Trade Union Confederation on the 26<sup>th</sup> National Report on the implementation of the European Social Charter Cycle XX-3 (2014) (SPAIN), pp.19-20

<sup>108</sup> European Social Charter, Coments from Spanish Trade Union Confederation on the 26<sup>th</sup> National Report on the implementation of the European Social Charter Cycle XX-3 (2014) (SPAIN), pp. 5-6

de trabajo, tiempo de exposición o de permiso pagado de manera adicional, lo que conlleva la vulneración del artículo 2.4 de la CSE. Esto exige que a los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en puestos de carácter peligroso para la salud, se les dé tiempo suficiente y regular para recuperarse del estrés o la fatiga. Esto se lograra a través de la reducción de jornada o tiempos de exposición. Tenemos que destacar respecto a esto, que nuestra legislación ha ido introduciendo una completa flexibilidad en esta materia, y no establece ninguna garantía legal. Por último, en materia de horas extraordinarias, concluyó que España no estaba de conformidad con el artículo 4.2 de la CSE, ya que el Estatuto de los Trabajadores no garantizaba una mayor remuneración o un mayor tiempo libre compensatorio de las horas extraordinarias<sup>109</sup>.

Las Conclusiones XX-4 (2015) del CEDS relativas al grupo temático 4 (“Niños, familias y migrantes”) llamaron la atención sobre aspectos negativos como los siguientes: la remuneración de los trabajadores jóvenes no era suficiente; no se pudo establecer que las dietas de los aprendices fueran adecuadas; tampoco se pudo establecer que existieran estructuras de custodia de menores, ni servicios de asesoramiento familiar, ni servicios de mediación adecuados; tampoco se pudo establecer que se consultara a las asociaciones representativas de las familias a la hora de elaborar políticas familiares; las prestaciones familiares no eran de un montante suficiente para un número significativo de familias; y no se pudo establecer que existiera una cooperación suficiente entre los servicios sociales de España y los países de emigración e inmigración, ni que las prestaciones de asistencia social no fueran excluidas del cálculo de los ingresos del trabajador a efectos de reagrupamiento familiar<sup>110</sup>.

En las conclusiones XXI-2 (2017), el CEDS observó que se habían adoptado determinadas restrictivas en materia de salud, seguridad social y protección social. Así, por ejemplo, destacó la introducción, a finales de 2012, de una condición de residencia en España para el derecho a los complementos de pensión de la seguridad social (Real

---

<sup>109</sup> COMISIÓN DE DD.HH, EXTRANJERIA Y PENITENCIARIA; Informe sobre la situación en España en materia de DD.HH; CEAJ, pp 6 a 9. Vid. también European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XX-3 (2014) (SPAIN).

<sup>110</sup> Consejo de Europa, *La Carta Social Europea en España*. Ficha de España; epígrafe II. Ejemplos de avances en la implementación de los derechos bajo la CSE, p. 4 (Disponible en: <https://rm.coe.int/l-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>); European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XX-4 (2015) (SPAIN),

Decreto-Legislativo 1716/2012); la exigencia, a partir de 2019 (fuera del período de referencia), de un nuevo criterio para calcular las pensiones, el llamado factor de "durabilidad", que tiene en cuenta el aumento de la esperanza de vida para salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema manteniendo pensiones adecuadas (Ley 23/2013 de 23 de diciembre de 2013); la aplicación, desde 2014, de un nuevo índice para aumentar las pensiones contributivas de la seguridad social, el IRP, cuyo valor se encuentra entre 0,25% y el IPC + 0,50%, lo que significa que las pensiones ya no estarían vinculadas a la inflación; la extensión del período de cotización necesario para tener derecho a la jubilación anticipada o parcial (Real Decreto Legislativo 5/2013 de 15 de marzo de 2013); o la introducción de condiciones más restrictivas para el derecho a las prestaciones de desempleo no contributivas después de los 55 años (Real Decreto Legislativo 5/2013, de 15 de marzo de 2013).

El CEDS también identificó otros incumplimientos de la CSE en sus conclusiones XXI-2 (2017) al indicar que las medidas adoptadas para reducir el número de accidentes laborales eran insuficientes; que el montante de las prestaciones por desempleo otorgadas a los desempleados sin carga familiar también eran insuficiente; que la igualdad de tratamiento en materia de acceso a las prestaciones familiares no estaba garantizada a los nacionales de los otros Estados Partes; que la exigencia de una cierta duración de la residencia (diez años) a la que se subordina el otorgamiento de una pensión de vejez no contributiva era excesiva; que la concesión de una renta mínima se subordinaba en la mayoría de Comunidades Autónomas a la exigencia de una cierta duración de la residencia y a criterios de edad (25 años); que la renta mínima no se otorgaba durante todo el tiempo en que existía la necesidad; y que el nivel de asistencia social a una persona sola sin recursos no era suficiente<sup>111</sup>.

---

<sup>111</sup> Consejo de Europa, *La Carta Social Europea en España*. Ficha de España; epígrafe II. Ejemplos de avances en la implementación de los derechos bajo la CSE, p. 3 (Disponible en: <https://rm.coe.int/1-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>); EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS, Conclusions XX-2 (2017), Spain,

## 5. CONCLUSIONES

1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya ratificación es un elemento imprescindible para ser miembro del Consejo de Europa, contiene un listado de derechos humanos que pueden ser caracterizados fundamentalmente como derechos civiles y políticos. El CEDH dispone además de un mecanismo de garantía, que ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo siendo la más radical, la operada por el Protocolo Número 11. La entrada en vigor del Protocolo número 11, al establecer un único órgano de control, de naturaleza jurisdiccional, de carácter permanente y jurisdicción obligatoria (el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), y al limitar las funciones del Comité de Ministros al control de la ejecución de sentencias del Tribunal.

El segundo gran instrumento de derechos humanos del Consejo de Europa es la Carta Social Europea, que también ha sufrido un proceso evolutivo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del CEDH, nos encontramos aquí con dos Cartas, una originaria y otra revisada, que conviven en el tiempo, ya que la CSE revisada cuenta con 33 Estados Parte, de los cuales 27 lo eran también de la Carta originaria, por lo que actualmente la CSE de 1961 sólo contaría con 10 Estados Partes (de los 37 que en total la ratificaron en su día). Esto supone además que quedan fuera del sistema de la CSE 4 Estados miembros del Consejo de Europa: Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. Por otro lado, a diferencia de lo que sucede en el CEDH, los derechos que reconoce la Carta (tanto en su modelo originario como en el revisado) no son exigibles en su totalidad a los Estados partes. La CSE se caracteriza por poder elegir “a la carta” las disposiciones que se aceptan. Se presenta como una especie de “menú” de derechos entre los que los Estados parte pueden, elegir qué derechos aceptan y cuáles no, eso sí con alguna restricción. En todo caso, ambas Cartas recogen fundamentalmente derechos económicos y sociales, incorporando un listado mayor la Carta revisada.

La garantía del goce y disfrute de los derechos económicos y sociales a la que se comprometen los Estados Parte de la CSE, se vincula también internacionalmente a la exigencia de que los Estados Partes se sometan a un sistema de control. En este caso, el sistema de control atribuye competencias a tres órganos. El órgano principal es CEDS,



los otros dos órganos son el Comité gubernamental de la CSE y del Código Europeo de Seguridad Social y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por lo que se refiere a los mecanismos de supervisión, la CSE contempla como único mecanismo de supervisión obligatorio para todos los Estados Partes la presentación de informes periódicos. No obstante, también se instituye un procedimiento de reclamaciones colectivas, si bien de carácter facultativo, al que, por el momento, sólo han aceptado quedar sometidos 15 Estados.

2. Uno de los Estados Parte tanto en el sistema del CEDH como de la CSE es nuestro país. España, en los inicios de su recién estrenada democracia, era un Estado deseoso de incorporarse cuanto antes al conjunto de Estados democráticos y para ello debía de empezar por aceptar los tratados internacionales que en materia de protección de los derechos humanos habían ido surgiendo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, tratados que, por lo demás, se habían tenido en cuenta en la elaboración del elenco constitucional español de derechos. La CSE fue uno de esos convenios. España ratificó este tratado el 6 de mayo de 1980, pero nunca ha ratificado ni el Protocolo adicional de 1995 de reclamaciones colectivas, ni la CSE revisada.

Pese a ello y a que, de conformidad con el artículo 96.1 de nuestra Constitución, únicamente los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente, pasan a formar parte de nuestro ordenamiento interno, tanto el Protocolo de 1995 como la CSE revisada poseen una cierta presencia en nuestro ordenamiento a través de dos vías indirectas. La primera vía, vendría constituida por el uso de la argumentación del Comité Europeo de Derechos Sociales por la jurisprudencia, tanto del TEDH como de nuestros tribunales nacionales, para razonar los fallos y definir de manera concreta los derechos fundamentales aducidos. Por otro lado, el CEDS incorpora en sus conclusiones a los informes presentados por España, tanto en la definición de los derechos sociales como de las obligaciones estatales, la jurisprudencia adoptada en el marco de los procedimientos de reclamaciones colectivas.

3. La falta de prestación del consentimiento por parte de España al Protocolo Adicional de 1995 implica que el control sobre la adecuación de nuestro país a los compromisos asumidos en el marco del sistema de la CSE queda limitado al mecanismo de informes periódicos, pero además el hecho de no haber ratificado la CSE revisada

supone que ese control no abarca a la totalidad de los derechos que protegería el sistema. En un sistema como el instaurado por la CSE caracterizado por poder elegir “a la carta” las disposiciones que se aceptan, aquel control podría haber quedado todavía más reducido si no fuera por el hecho de que España se obligó a cumplir lo establecido en el conjunto de los 72 párrafos de la CSE originaria, y por tanto, los diecinueve derechos que contienen, aunque cabe hacer dos precisiones al respecto. Por un lado, España acompañó su ratificación con una declaración en relación con la interpretación y aplicación de los artículos 5 (derecho sindical) y 6 (derecho a la negociación colectiva) de la CSE con el fin de hacerlos compatibles con la Constitución española. Por otro lado, España denunció el artículo 8.4.b (prohibición del empleo de mujeres en ciertas actividades peligrosas), aunque este hecho no puede considerarse de carácter limitativo, ya que respondió más a una extensión de los derechos de las mujeres. Además nuestro país ratificó el Protocolo Adicional de 1988, que completa la Carta con nuevos derechos. Por tanto, parece que podríamos afirmar que el número de derechos económicos y sociales objeto de supervisión respecto de España es relativamente amplio, si bien podría ampliarse con la ratificación de la CSE revisada.

El sometimiento de España al mecanismo de los informes periódicos presenta algunas otras limitaciones intrínsecas al propio sistema. Así, la supervisión se hace sobre la base de la información que proporciona el propio Estado, aunque, como vimos, también se recibe información de otros actores como las organizaciones sociales (como, por ejemplo, de CCOO y UGT). Por otro lado, las conclusiones del CEDS son meramente declarativas, por lo que no tienen fuerza ejecutiva en su orden interno, aunque ello no obsta para que los Estados tengan que adoptar las medidas necesarias para darles efecto en el derecho interno. Si bien el seguimiento del cumplimiento de estas conclusiones es asegurado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, si la no conformidad persiste éste podrá como mucho adoptar recomendaciones individuales dirigidas a los Estados. Además, aunque los informes son anuales, desde 2006, no se presentan sobre la totalidad de la Carta, sino cada año sobre uno de los cuatro bloques temáticos en que se han dividido los derechos reconocidos en la CSE, completándose cada cuatro años el ciclo completo de control por el CEDS de este instrumento jurídico.

A pesar de estas limitaciones, y como hemos ido viendo en los informes presentados por España, el propio sistema contribuye en cierta medida a la mejora paulatina de la

protección de los derechos económicos y sociales en los Estados Partes. Esta evolución parece traer causa en cierta medida de la periodicidad en la presentación de informes sobre una misma materia, ya que requiere que se realicen acciones de las que poder informar y que se demuestre que se han corregido los errores o situaciones de no conformidad con la Carta observados en anteriores conclusiones del CEDS. Del examen de los diferentes informes, parece claro que la pertenencia de España al sistema ha favorecido la adopción de una regulación y una práctica acordes con los desarrollos de la CSE. Pero sobre todo, aquella positiva evolución parece estar provocada por el hecho de que, como todo tratado internacional de derechos humanos, la CSE es un instrumento vivo, cuya interpretación acompaña la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, y, por tanto, exige una adecuación constante por parte de los Estados. Además, el examen del CEDS no se extiende sólo a los textos constitucionales, legislativos o reglamentarios vigentes en España, sino también a las prácticas nacionales, afectando al Estado en su conjunto. En este sentido, las conclusiones analizadas mencionan, como vimos, innumerable regulación que ha sido adoptada o modificada para mejorar la protección, pero también prácticas como la aprobación en 2013 del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, resultado del trabajo conjunto de las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, o como los programas de educación sanitaria. Por otro lado, el ciclo de cuatro años permite profundizar en el examen de cada grupo temático.

4. En cualquier caso, y como forma de superar muchas de las limitaciones apuntadas y de mejorar la protección de los derechos económicos y sociales, consideramos necesario que España ratifique tanto el Protocolo Adicional de 1995 como la CSE revisada, cuestión para la que además no parecen existir más límites que los estrictamente políticos. A más largo plazo, convendría pensar en la reforma misma del sistema más en la línea del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o al menos en una mayor judicialización y en una ampliación de la legitimación activa ante los órganos de control.

# **BIBLIOGRAFÍA**

## **1. Documentación**

Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950

Carta Social Europea Revisada, de 3 de mayo de 1996

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que prevé un Sistema de Reclamaciones Colectivas. Adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 22 de junio de 1995.

Protocolo de Enmienda a la Carta Social Europea, que introduce modificaciones a varios de sus artículos, de 21 de octubre de 1991

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, de 5 de mayo de 1988

Carta Social Europea, 18 de octubre de 1961

European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XX-2 (2013) (SPAIN), Articles 3, 11, 12, 13 and 14 of the 1961 Charter, November 2014 (Disponible en: HUDOC-ESC)

European Social Charter, Comments from Spanish Trade Union Confederation on the 26<sup>a</sup> National Report on the implementation of the European Social Charter Cycle XX-3 (2014) (SPAIN) , pp. 5 -20

European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XX-3 (2014) (SPAIN), Articles 2, 4, 5 and 6 of the 1961 Charter and articles 2 and 3 of the 1988 Additional Protocol, January 2015 (Disponible en: HUDOC-ESC)

European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XX-4 (2015) (SPAIN), Articles 7, 8, 16, 17 and 19 of the 1961 Charter, January 2016 (Disponible en: <https://rm.coe.int/16805939f3>).

European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XXI-1 (2016) (SPAIN), Articles 1, 9, 10, 15, 18 of the 1961 Charter and Article 1 of the Additional Protocol, January 2017 (Disponible en: <https://rm.coe.int/16806ebc49>)

European Committee of Social Rights, European Social Charter, Conclusions XXI-2 (2017) (SPAIN), Articles 3, 11, 12, 13, 14 of the 1961 Charter and Article 4 of the Additional Protocol, January 2018 (Disponible en: <https://rm.coe.int/compilation-of-conclusions-xxi-2-2017-by-country/1680786063>).

Council of Europe, *Spain and the European Social Charter*, Country by country Factsheets. Disponible en: <https://rm.coe.int/l-espagne-et-la-charte-sociale-europeenne/1680492a5d>

Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), Comisión de Derechos Humanos, Extranjería y Penitenciario. *Informe sobre la situación en España en materia de Derechos Humanos y las distintas sanciones impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, en particular pp. 1-9 (Disponible en: <https://www.idhc.org/arxiu/noticies/INFORME-SOBRE-LA-SITUACION-EN-ESPANA-EN-MATERIA-DE-DDHH.pdf>).

## **2. Monografías y artículos**

AGUDO, M. J., El Tribunal Constitucional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Ed. Servicios de Publicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba, 2001, pp. 25-34.

ARUFE, A., MARTINEZ, J., La condena del Consejo de Europa a España, hecha pública en Enero de 2010, por incumplimiento de la Carta Social Europea en Materia de Seguridad y Salud Laboral. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña [en línea] 2011, (14), 283-290 [consultado 8-6-2017] Disponible en

<http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/10378/Ad%2015%202011%20art%2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

BELORGEY, J-M., La Carta Social Europea y su Órgano de Control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. UNED Revista de Derecho Político [en línea], 2007, (70), 347-377 [consultado el 23-5-2017]. Disponible en [http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-2007-70-5FEF2A71&dsID=carta\\_social.pdf](http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-2007-70-5FEF2A71&dsID=carta_social.pdf)

BONET PÉREZ, J. y BONDÍA, D.: “La Carta Social Europea”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 441-480 (disponible en: <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/hnet/hnet13.pdf>)

CARRILLO, J.A., El convenio Europeo de Derechos Humanos., Tecnos, Madrid, 2003, pp. 19-75

CARRILLO SALCEDO, J. A.: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.): La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 395-440 (disponible en: <http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/hnet/hnet13.pdf>)

DÍEZ DE VELASCO, M. *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18 ed, Madrid: Tecnos, 2013.

DÍEZ DE VELASCO, M. *Las Organizaciones Internacionales*, 17 ed, Madrid: Tecnos 2013.

ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (I)”, en DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18ª ed., Tecnos, 2013, pp. 663 y ss

ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “La protección internacional de los derechos humanos (II)”, en DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18ª ed., Tecnos, 2013, pp. 607 y ss

FRANCOIS, J., KOMBE, A. Carta Social Europea y Convenio Europeo de Derechos Humanos: Perspectivas para la próxima década. *Revista de Derecho Político* [en línea], 2006, (67), 385-408 [consultado 1-5-2017] Disponible en [http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-2006-67-79276D32&dsID=carta\\_social.pdf](http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:Derechopolitico-2006-67-79276D32&dsID=carta_social.pdf)

JIMENA, L., El último bastión en la defensa de los Derechos Sociales: La Carta Social Europea. *Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid* [en línea], 2014, (29), 171-189 [consultado 6-5-2017] Disponible en [https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/667601/RJUAM\\_29\\_9.pdf?sequence=1](https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/667601/RJUAM_29_9.pdf?sequence=1)

JIMENA, L., Retos Pendientes del estado social español: en especial, la ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996. *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Pública* [en línea], 2006, (2), 40-71 [consultado 1-6-2017] Disponible en [http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/02\\_TRI\\_03\\_jimena.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/anuario/articulos/descargas/02_TRI_03_jimena.pdf)

JIMENA, L., Protección de refugiados y otras personas vulnerables en la Carta Social Europea. *UNED: Revista de derecho político* [en línea], 2015, (92), 245-272, [consultado el 1-4-2017], Disponible en <http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/14427>

JIMENA, L., El derecho a un proceso equitativo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su proyección nacional. *Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, [en línea], 2005, 50 (51), 177-191, [consultado el 5-4-2017] Disponible en: [Dialnet-ElDerechoAUnProcesoEquitativoReconocidoEnElConveni-2538660.pdf](http://dialnet-elDerechoAUnProcesoEquitativoReconocidoEnElConveni-2538660.pdf)

JIMENA, L., La Jurisprudencia Europea sobre Derechos Sociales. Archivo jurídico UNAM [en línea] 281-311 [consultado 7-5-2017] Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3063/13.pdf>

JIMENA, L. , Sistema Europeo de Derechos Humanos. UNLP, Instituto de Derechos Humanos (15-3-2017) [consultado 10-6-2017] Disponible en <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/power-point-tercera-unidad.pdf>

JIMENEZ, F., La Carta Social Europea (REVISADA): Entre el desconocimiento y su rehabilitación como instrumento de coordinación de las políticas sociales europeas. Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). [Consultado el 15-4-2017] Disponible en <https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/5830/CartaSocialrevisada.pdf;jsessionid=8723C31F1016F0C38079E3229FC07314?sequence=1>

MARIÑO, F.M, FERNANDEZ, C., Política Social Internacional y Europea. Universidad Carlos III (Madrid), 1996, p. 233-234.

MILLONE, C., ¿Es razonable que España no haya ratificado todavía la Carta Social Europea revisada en 1996? Revista Jurídica de los Derechos Sociales [en línea], 2012, (2), 113-132 [consultado el 22-5-2017] Disponible en [https://www.upo.es/revistas/index.php/lex\\_social/article/view/282/279](https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/282/279)

MONTES, F.J., El Consejo de Europa. Anuario Jurídico y Económico escurialense XLVII [en línea], 2014, (47), 57-92 [consultado 4-4-2017] Disponible en [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElConsejoDeEuropa-4639615%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElConsejoDeEuropa-4639615%20(1).pdf)

MORTE, C., El Convenio Europeo de Derechos Humanos: primeros pasos para la reforma. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Epoca, Vol. 5, 2004, pp 755-784.

NUTONI,C., La Carta Social en resumen, Directorate of communication and research printed in the council of Europe workshops, 2007. [consultado el 30-6-2017] Disponible en:



[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004\\_2009/documents/dv/chartesocialedepliant-/CharteSocialedepliant-es.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/chartesocialedepliant-/CharteSocialedepliant-es.pdf)

OYARZUN, R., El Consejo de Europa. Revista de Política Internacional [en línea], 1951, (5) 79-95 [consultado 4-4-2017] Disponible en [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElConsejoDeEuropa-2495015%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElConsejoDeEuropa-2495015%20(1).pdf)

PATOR, G., El Consejo de Europa pide a España que no excluya a los 'sin papeles' de la sanidad, (29-1-2014) [consultado 9-6-2017] Disponible en [http://cadenaser.com/ser/2014/01/29/internacional/1390959918\\_850215.html](http://cadenaser.com/ser/2014/01/29/internacional/1390959918_850215.html)

PEREZ, R., La Jurisprudencia Social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lex-social: revista de los derechos sociales [en línea], 2011, (1), 93-105 [consultado el 5-4-2017] Disponible en [https://www.upo.es/revistas/index.php/lex\\_social/article/view/255/250](https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/255/250)

RODRIGUEZ, M., La Carta Social Europea y la Problemática de su aplicación. Revista Política Social [en línea], 1978, (118), 5-43 [consultado el 5-4-2017] Disponible en [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaCartaSocialEuropeaYLaProblematICADeSuAplicacion-2494954%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaCartaSocialEuropeaYLaProblematICADeSuAplicacion-2494954%20(1).pdf)

SANCHEZ, A., La reforma del mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Madrid: Colex, 1995, pp 285

TERRADEZ, D., La Carta Social Europea en el Orden Constitucional Español, Valencia, 2014, Tesis doctoral, Facultad de Derecho Universidad de Valencia Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia y de la Administración. Disponible en:

[http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/35223/LA%20CARTA%20SOCIAL%20EUROPEA%20EN%20EL%20ORDEN%20CONSTITUCIONAL%20ESPA%C3%91OL\\_impresi%C3%B3n%20definitiva.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/35223/LA%20CARTA%20SOCIAL%20EUROPEA%20EN%20EL%20ORDEN%20CONSTITUCIONAL%20ESPA%C3%91OL_impresi%C3%B3n%20definitiva.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

### **3. Recursos web**

Portal del Consejo de Europa: [www.coe.int](http://www.coe.int)

Página de la Carta Social Europea: <https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter>

Página de la Oficina de Tratados del Consejo de Europa:  
<https://www.coe.int/fr/web/conventions>

Página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  
<http://www.exteriores.gob.es>